

MARIO SÁNCHEZ | DOUGLAS CASTRO | RONY RODRÍGUEZ

CIUDADANÍA Y VIOLENCIA

Una aproximación a sus múltiples
expresiones en Nicaragua



Ciudadanía y Violencia
Una aproximación a sus múltiples expresiones en Nicaragua

Mario Sánchez, Douglas Castro, Rony Rodríguez

Mario Sánchez
Douglas Castro
Rony Rodríguez

CIUDADANÍA Y VIOLENCIA

Una aproximación a sus múltiples
expresiones en *Nicaragua*

CASC | CENTRO DE ANÁLISIS
SOCIOCULTURAL

Primera edición, 2015

Sánchez, Mario; Castro, Douglas, y Rodríguez, Rony
Ciudadanía y Violencia. Una aproximación a sus múltiples
expresiones en *Nicaragua* / Mario Sánchez, Douglas Castro,
Rony Rodríguez

– 1 ed. -- Managua: CASC, UCA Publicaciones, 2015.

118 p. : 12.5 x 20.5 cm — (Sección de Paz y Conflictos)

ISBN: 978-99924-36-40-0

1. Violencia Social 2. Seguridad Ciudadana. 3. Nicaragua-Condiciones
Sociales-Investigaciones.

N 303.6 S211

Diseño de portada: Néstor López, Douglas Castro y Rony Rodríguez

Diagramación: Rony Rodríguez

Corrección de estilo: Hebé Zamora

©2015, Centro de Análisis SocioCultural de la Universidad Centroamericana,
Nicaragua.

Rotonda Rubén Darío 150 metros al oeste, Apartado Postal 69.

Comentarios: investigacioncasc@ns.uca.edu.ni

www.casc.uca.edu.ni

Tel. (+505) 22785590 y 22783923 extensión 1117

ISBN: 978-99924-36-40-0

Impreso en Managua • *Printed in Managua*

Impresión: Imprime, S.A. Managua

La investigación y publicación de este libro contó con el apoyo financiero
del Fondo de Gobernabilidad Democrática - IBIS Nicaragua.

CONTENIDO

PRÓLOGO – JOSÉ MIGUEL CRUZ	11
INTRODUCCIÓN	15
I. ¿POR QUÉ ESTUDIAR LA VIOLENCIA Y LA (IN) SEGURIDAD EN UN PAÍS COMO NICARAGUA?	19
1.1. La raigambre histórica de las violencias	20
1.2. Repunte de violencia en Nicaragua y Centroamérica: la difícil transición	22
1.3. La singularidad de Nicaragua: la refundación del Estado	25
II. ¿CÓMO ENTENDER LA VIOLENCIA EN NICARAGUA?	33
2.1. Apuntes teóricos para un estudio de la violencia en Nicaragua	33
2.2. ¿Cómo se estudió la violencia en esta investigación?	42
III. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y DE LA (IN) SEGURIDAD EN NICARAGUA?	51
3.1. ¿A qué Nicaragua nos referimos en esta investigación sobre violencia?	51
3.2. ¿Cómo perciben y experimentan las violencias y las (in) seguridades los nicaragüenses?	56
3.2.1. Violencia directa contra la propiedad y las personas	56
3.2.2. Violencia cultural y estructural	72
IV. CONSIDERACIONES FINALES	101
REFERENCIAS	103

SIGLAS

BCN	Banco Central de Nicaragua
BM	Banco Mundial
CELADE	Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
CENIDH	Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CFSV	Consejos de la familia, Salud y Vida
CPC	Consejos del Poder Ciudadano
EMNV	Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida
FIDEG	Fundación Internacional para el Desafío Económico Global
FMI	Fondo Monetario Internacional
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
GPC	Gabinete del Poder Ciudadano
INIDE	Instituto Nacional de Información de Desarrollo
IRC	Insuficiencia Renal Crónica
ISI	Industrialización por Sustitución de Importaciones
MAM	Movimiento Autónomo de Mujeres
MARENA	Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
MINED	Ministerio de Educación
MINSA	Ministerio de Salud
MITRAB	Ministerio del Trabajo
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PIB	Producto Interno Bruto
PLC	Partido Liberal Constitucionalista
PLI	Partido Liberal Independiente
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNDH	Plan Nacional de Desarrollo Humano
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNAM	Unión Nacional del Adulto Mayor
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime

PRÓLOGO

NICARAGUA Y LAS PREGUNTAS NECESARIAS

La violencia todavía gobierna en Centroamérica. Después de décadas de discriminación social y económica, violencia política, guerras civiles, revoluciones, transiciones políticas, pactos de paz y elecciones, múltiples expresiones de violencia siguen dictando la forma en que los centroamericanos viven, construyen su ciudadanía y ejercen el poder. La violencia ya no es prerrogativa exclusiva del Estado, pero el Estado sigue siendo un actor fundamental en su producción y propagación. La violencia ya no la dictan solo los poderosos, pero los poderosos todavía la entienden mejor y la usan más efectivamente. La violencia ya no es el último instrumento de contestación de los marginados. En realidad nunca lo fue. Pero muchos desposeídos siguen interpretando a la violencia como la mejor manera de recuperar el futuro y la dignidad.

Si Centroamérica es ahora la región más violenta del mundo no es por accidente. Tampoco lo es por destino. Los fundamentos de la violencia se han construido de forma paulatina pero consistente a lo largo de la historia y las oportunidades para demolerlos han sido ignoradas y desperdiciadas una y otra vez. Sin embargo, y como bien lo explican Mario Sánchez, Douglas Castro y Rony Rodríguez en este estudio, las violencias que afectan a Centroamérica son muchas. Y para entenderlas, es nece-

sario estudiar y comprender sus contextos igualmente variados y complejos.

Nicaragua, probablemente el más centroamericano de los países del istmo, no es la nación más violenta de Centroamérica, pero la violencia reside también en su estructura social, en su forma de ejercer el poder y en las precariedades en las que deben vivir sus ciudadanos. Nicaragua tiene todo lo que entendemos como centroamericano. Una historia de violencia, pero también de transformación y de esperanza. Una estructura que genera carencia y miseria al lado de la más grande abundancia natural. Un pueblo alegre y resiliente al lado de conflictos latentes y agravios imborrables. Una pretensión de soberanía en medio del proyecto más claro de entrega de territorio.

Para comprender las expresiones de la violencia en Nicaragua es importante entender la complejidad de este país y de sus problemas en el contexto de una Centroamérica que todavía no encuentra la fórmula para la paz con justicia y desarrollo. Los autores de este libro han sabido comprender esto y han realizado el primer estudio sobre la violencia en Nicaragua que hace justicia a los matices, a las variedades y a las complicaciones que implica hacer investigación social en un contexto en donde los datos no reflejan lo que significa ser ciudadano con plenos derechos.

Y es que la mayoría de estudios sobre seguridad y violencia en la región suelen defraudar cuando se trata de estudiar el caso nicaragüense. Por un lado, algunos reportes pecan de simplismo porque reducen Nicaragua a un eslogan gubernamental que no refleja las complejidades de la seguridad y las limitaciones de la aparente paz social. Por otro lado, ciertos estudios están tan deseosos por mostrar que en Nicaragua hay violencia que se olvidan de contextualizar e interpretar lo que significan las expresiones de la violencia y la conflictividad nicaragüen-

se en la estructura de las relaciones sociales en Centroamérica. Ambas aproximaciones simplifican la realidad nicaragüense y limitan su capacidad para explicar por qué esta nación es tan diferente al resto a pesar de las similitudes.

Este trabajo, por el contrario, constituye un proyecto distinto y, por lo mismo, valioso. Sin duda el primero y el más importante de su tipo. No tanto porque el estudio sobre el cual gira pretenda ofrecer todas las respuestas, sino porque hace las preguntas primordiales y necesarias que han sido ignoradas por la comunidad académica: ¿cuáles son las violencias que experimentan y enfrentan los nicaragüenses?, ¿cómo se perciben las inseguridades?, ¿cómo se insertan esas violencias en la estructura social?, ¿qué significa ser nicaragüense en el contexto de los múltiples conflictos que definen las relaciones sociales?, ¿cuáles inseguridades son urgentes y cuáles no?, ¿cómo se entiende la democracia en un contexto de múltiples conflictos? En conclusión: ¿cómo entender la construcción de ciudadanía en Nicaragua en el contexto de la violencia centroamericana?

La clave del avance en la investigación social que pretende transformar la realidad no reside en las respuestas sino en la preguntas. Con este trabajo, los autores han marcado el derrotero del estudio de la violencia y la inseguridad en la región y han señalado la importancia de atender a las complejidades y las estructuras que subyacen y acompañan a la generación de los conflictos violentos. Mucho del debate sobre la violencia en Nicaragua se ha concentrado sobre la discusión de si la misma es parte de un mito o no. La verdad es que en Centroamérica no pueden existir mitos sobre la violencia. Todas las formas posibles de matanza, de barbarie, de agresión, de negación y de exclusión han sido aplicadas y perpetuadas en esta franja de tierra. Pero por lo mismo, todas las posibles maneras de resistencia, de humanidad, de virtud y de heroísmo han sido precisadas por sus ciu-

dadanos para seguir viviendo y mantener la esperanza. Nicaragua es un ejemplo de los retos a los que debemos enfrentarnos como investigadores sociales para poder articular respuestas que mantienen viva la certidumbre de que una Centroamérica con paz, justicia y democracia es posible.

Como lo hacen Sánchez, Castro y Rodríguez, solo tenemos que hacer las preguntas adecuadas.

PhD. José Miguel Cruz
Universidad Internacional de Florida

*La democratización se centra en las luchas
entre ciudadano y Estado.
Charles Tilly*

INTRODUCCIÓN

Con el desmantelamiento de los conflictos armados en Centroamérica, surgió un interés marcado en investigar los temas de violencia y de inseguridad. Se esperaba que con el fin de la guerra, estos fenómenos pasarían a un segundo plano, sin embargo, ello no ha sido así, dado que en ningún lugar donde se vive un período de transición o posconflicto, la violencia y la inseguridad se han resuelto totalmente. La situación de violencia y de inseguridad ha empeorado, a tal punto que los países del norte de la región (Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice¹) registran más muertes que durante los conflictos armados (Zinecker, 2012).

En este contexto se inserta la realidad de Nicaragua, país que a pesar de haber transitado por intensos períodos de violencia, es hoy uno de los países que presenta indicadores más bajos de violencia mortífera (*ver Gráfico 1*), siendo esta la región más violenta del mundo (UNODC,

¹Honduras y Belice, aunque no tuvieron conflictos armados, actualmente tienen altos niveles de violencia.

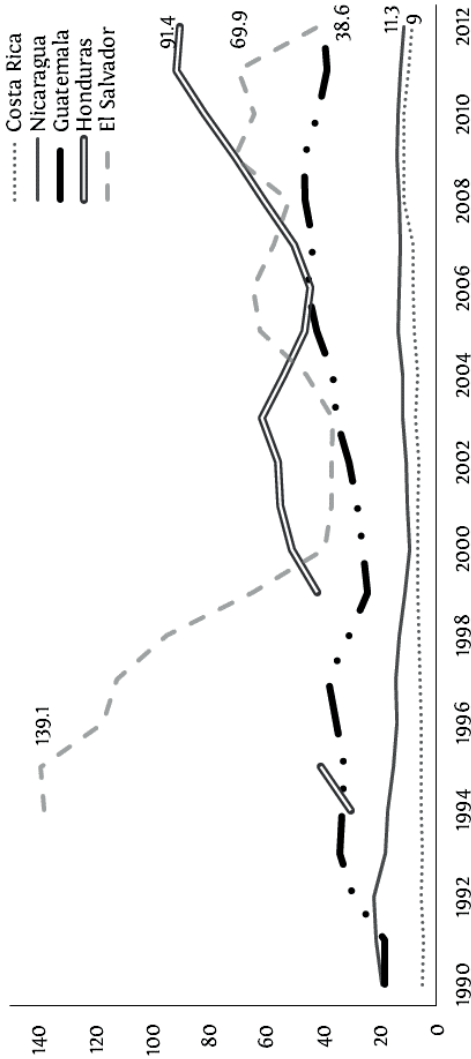
2013). Esta situación se ve reflejada si se comparan las tasas de homicidios de los otros países del istmo. A la fecha, el país con las tasas de homicidios más altas es Honduras con 90.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, le siguen Belice (44.7), El Salvador (41.2), Guatemala (39.9), Panamá (17.3), Nicaragua (11) y Costa Rica (8.9) (UNODC, 2013).

Debido a que Centroamérica se considera la región más violenta del mundo, la violencia y la (in) seguridad son preocupaciones muy sentidas por la ciudadanía, por lo cual, estos temas han punteado en las encuestas de opinión como uno de los principales problemas en los países centroamericanos (Booth, 2013). Si bien es cierto que la violencia no preocupa tanto a los ciudadanos nicaragüenses como a los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, este fenómeno se ha posicionado en la palestra pública de Nicaragua.

Es importante estudiar la violencia y la (in) seguridad por el alto costo social, político y económico que representan para la sociedad. El costo social se manifiesta porque la violencia somete a la ciudadanía al miedo y a la desconfianza. Además, tiene impactos muy negativos en la cohesión social, pues erosiona el bienestar y la armonía social. Incluso, en contextos de marcada violencia, la ciudadanía es más partidaria de soluciones al margen de la ley contra la violencia y la inseguridad; tal es el caso de El Salvador, de Guatemala y de Honduras (Huhn, 2008).

En lo político, los costos se deben a que la violencia cuestiona las concepciones clásicas del Estado y del sistema democrático, que son ostentar el monopolio legítimo de la violencia y brindar seguridad a la ciudadanía. De ahí que esta pierda confianza en sus instituciones y en el sistema político en general. Esto explica por qué la violencia tiene mucha atención de la clase política, pues sus acciones y discursos sobre esta, la ubican de manera positiva o negativa ante la ciudadanía.

Gráfico 1: Tasa de homicidio por 100 mil habitantes, países de Centro América.



Fuente: Elaboración propia a partir de United Nation Office on Drugs and Crime UNODC (2013), PNUD (1999) y Mendoza (2011).

En el caso de los costos económicos de la violencia, en Nicaragua estos son muy altos. Según Acevedo (2006), expresa que para ese año, la violencia le costaba a Nicaragua en atención a víctimas de la actividad delictiva, el 10% de su producto interno bruto (PIB). Este monto representa lo que gastan las instituciones del Estado y el sector privado en salud, pérdidas de producción y costos institucionales.

El contenido del texto está distribuido en tres capítulos y en su respectiva conclusión. En el primer capítulo se reflexiona sobre la importancia de estudiar la violencia en un país como Nicaragua, específicamente, a partir de sus raíces históricas, los momentos críticos de su repunte en el contexto de transición política, y algunos elementos que caracterizan su situación singular, en comparación con el resto de los países de Centroamérica en términos de violencia; en el segundo capítulo se formulan consideraciones teóricas y metodológicas que sustentan el análisis de los resultados de este estudio, y, en el tercer capítulo, se parte de una contextualización de las condiciones estructurales desde las cuales se analiza la violencia, según el conocimiento y la victimización de la ciudadanía nicaragüense. Se concluye con algunas consideraciones sobre los principales hallazgos del estudio y las nuevas líneas de investigación.

*Un pequeño recordatorio de que nada,
nada en absoluto ocurre sin un pasado.
Robert Fisk*

I. ¿POR QUÉ ESTUDIAR LA VIOLENCIA Y LA (IN) SEGURIDAD EN UN PAÍS COMO NICARAGUA?

Durante los años de los conflictos armados internos, Nicaragua y el resto de Centroamérica fueron el foco de atención de muchos académicos, de medios de comunicación, de políticos y de movimientos sociales en el mundo. En otras palabras, la región tuvo mucha resonancia en las postrimerías de la Guerra Fría, que pronto se olvidó durante los años 90, para volver a posicionarse en el debate mundial a inicios del siglo XXI. En estas discusiones, Centroamérica destacó por la intensidad de la violencia y por la convulsa situación política. Posteriormente, con la firma de los acuerdos de paz y con la tortuosa transición democrática, los tópicos que se destacaron fueron las carencias de nuestros países en materia de gobernabilidad y de desarrollo económico, y se enfocó especialmente la violencia y la (in) seguridad.

Para explicar esta dinámica, es necesario reconocer el papel de la violencia en la construcción de la historia nicaragüense, desde la colonización, pasando por la inde-

pendencia y por las disputas libero-conservadoras, hasta las contradicciones entre dictadura somocista, insurrección y Revolución Sandinista, para llegar al período de una paz inconclusa inaugurada en 1990. De ahí que sea necesario relatar la raigambre histórica que ha tenido la violencia en Nicaragua, como los repuntes que se han vivido en ciertos períodos, para discutir la singularidad de su situación en perspectiva centroamericana.

1.1. La raigambre histórica de las violencias

El abordaje de la violencia en Centroamérica ha carecido de estudios que la historicen. En primer lugar, porque las instituciones y los grupos de poder no se han preocupado por comprenderla de manera integral, sino que la han identificado como un hecho aislado, despolitizado y descontextualizado. De esta manera, estos actores deslindan sus responsabilidades en la producción y en la reproducción de las distintas formas de violencia y en su instrumentalización política. En segundo lugar, porque en las investigaciones académicas ha predominado un enfoque positivista con el afán de medir la violencia y la (in) seguridad, obviando aspectos socioculturales y estructurales, así como la experiencia y el contexto de los sujetos que son víctimas y victimarios de violencia. Por consiguiente, es necesario historizar la situación de violencia en la región para su mejor comprensión y su transformación.

Históricamente, Nicaragua y los tres países del norte de la región centroamericana han sufrido de forma diferenciada e ininterrumpida períodos de violencia, que se remontan desde tiempos previos al surgimiento del Estado-Nación, en el siglo XIX, hasta los actuales e inacabados procesos de transición hacia la democracia. La región ha sido escenario de gobiernos autoritarios, de dictaduras militares, de golpes de Estado, de represión política, y más recientemente, de conflictos armados en los que la violencia alcanzó niveles de terrorismo de Estado (Sán-

chez, 2010). Esta violencia política afectó devastadoramente al tejido social, dado el carácter altamente destructivo de la represión, sobre todo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala (Beristáin y Riera, 1993; Beristáin, 1998). Torres-Rivas (2011) sostiene que “en los últimos cincuenta años de convulsa vida política, al menos dos generaciones de centroamericanos han sufrido la anormalidad de una existencia personal gravemente alterada” (p. 75).

En el caso de Nicaragua, Close (2009) advierte que desde su independencia siempre ha transitado por un turbulento sendero político, por lo que ha sido considerada la república más inestable y convulsa, pues “sus primeras cuatro décadas de vida independiente estuvieron marcadas por continuas guerras internas entre los liberales de León y los conservadores de Granada” (p. 12). En años posteriores, en el período de la Revolución Liberal, Estados Unidos apoyó un golpe de Estado liderado por los conservadores, inaugurándose de nuevo otro período de conflicto interno que se prolongó hasta 1927. A partir de 1936, se inicia la prolongada dictadura somocista, que es derrocada en 1979. Durante todo este tiempo, parte de la sociedad nicaragüense sufre una de las más crueles épocas de terrorismo de Estado, hasta que se logra el derrocamiento de dicha dictadura con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Sin embargo, a inicios de la década de los 80, el país vuelve a sumergirse en otro conflicto interno que provocó la muerte de unas 50,000 mil personas y otras situaciones dolorosas que han herido profundamente la vida de muchas familias nicaragüenses. Según la experiencia de acompañamiento de psicólogas sociales, en su mayoría las familias afectadas no han logrado elaborar sus duelos de los distintos hechos trágicos que han afectado su vida, como lo formula Cabrera (2002):

Las manifestaciones sociales y políticas de los duelos no procesados no son tan inmediatas.

Cuando una persona no elabora sus traumas, a los seis meses, a los dos o tres años, a la larga, se revelan consecuencias sociales. Las más frecuentes son la apatía, el aislamiento y la agresividad (párr. 11).

Prácticamente, la sociedad nicaragüense ha vivido largos períodos de situaciones políticas muy violentas de manera continua, con pocos momentos de reconstrucción y de transformaciones profundas de los problemas que han detonado los múltiples conflictos y sus consecuentes escaladas de violencia, sobre todo, cuando las sociedades centroamericanas transitaron a complicados procesos de transición política a partir de la década de los 90.

1.2. Repunte de violencia en Nicaragua y Centroamérica: la difícil transición

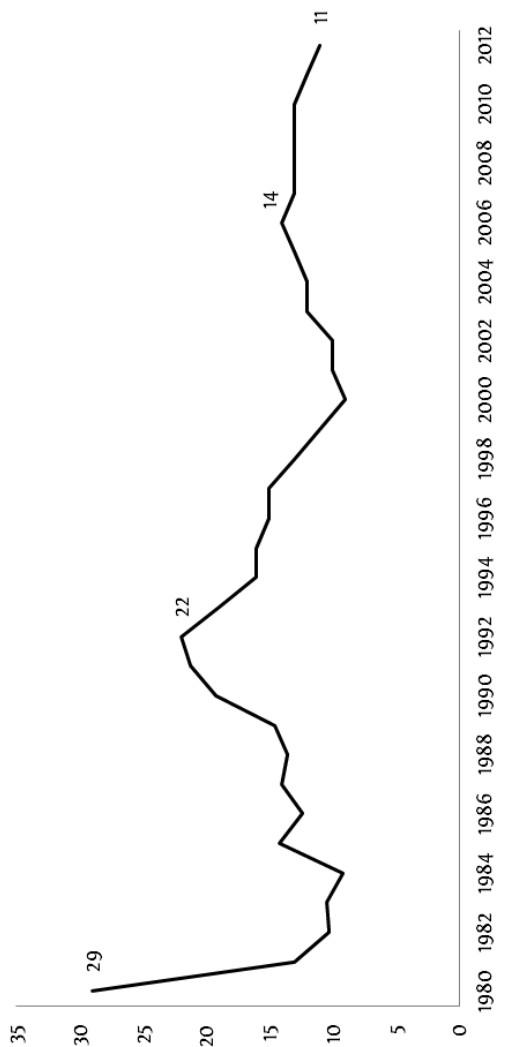
En Nicaragua, la pacificación se limitó a una política de desarme, en la que los actores primordiales fueron el Ejército y la “Contra”, quedando fuera de estas negociaciones las víctimas. Sin embargo, es importante señalar que esta transición estuvo al borde de otra guerra interna, pues para 1992 se formaron nuevos grupos armados (recontras, recompas y revueltos²) con aproximadamente 22,835 excombatientes con diversas motivaciones, desde reivindicaciones políticas hasta acciones de corte delincuencial, como afirma Oettler (2013). Esto alertó en cuanto a que la desmovilización militar sin un adecuado acompañamiento no garantizaría el carácter irreversible del proceso de pacificación, pues la construcción de la paz era y sigue siendo un desafío muy complejo.

²Recompas: exmiembros del Ejército Popular Sandinista, en alusión a “compañeros”. Recontras: exmiembros de la “Contra”. Revueltos: organización armada con exmiembros del Ejército y de la “Contra” juntos.

En los primeros años de la década de los 90 se desmovilizaron 22,000 contras y 60,000 miembros del Ejército, para un total de 82,000 combatientes. Esto generó una fuerte presión social, por el incumplimiento de los compromisos acordados en materia de reinserción social, debido a la falta de voluntad política y a los limitados recursos para hacer frente a sus demandas. En otras palabras, se priorizó la desmovilización y el desarme de los combatientes, sin garantizar las bases para una reinserción efectiva y sostenible (Montenegro, Cuadra, Saldomando y Zamora, 2005). Además, el gobierno de ese entonces adoptó radicalmente unas políticas de ajuste estructural que imposibilitaban la inversión social necesaria para el proceso de pacificación. De esta forma, el Estado nicaragüense cerró espacios para la canalización de demandas y de reivindicaciones con un perfil autoritario e indolente.

Las políticas y los grandes acontecimientos tienen repercusiones socioeconómicas negativas que pueden incidir en el comportamiento violento (*ver Gráfico 1.2.1*). Según Granera y Cuarezma (1997), el pico más alto de la violencia de inicio de los 80 se explica por el reciente proceso de refundación del Estado de Nicaragua y por la creación de sus instituciones. En este sentido, las fuerzas del orden público en sus condiciones emergentes no tenían la capacidad para garantizar seguridad a la ciudadanía, sin embargo, progresivamente, se fue logrando un mejor desempeño a medida que se fue fortaleciendo y consolidando la Policía, alcanzando sus mejores resultados entre los años 1982 y 1984. Luego, desde 1985, se revirtió la tendencia producto del recrudecimiento de la guerra y del deterioro económico. De igual forma, repercutió el giro político que en materia de seguridad se dio en la época, pues adquirió un énfasis en seguridad del Estado, que concentró recursos de la Policía en detrimento de la seguridad pública.

Gráfico 1.2.1: Evolución de la tasa de homicidios en Nicaragua



Fuente: Elaboración propia a partir de Policía Nacional (2013) y Zinecker (2013).

Posterior a la guerra, la tendencia en las tasas de homicidio mantiene su crecimiento por otras razones, dado el complejo contexto de transición ya señalado, que llevó a un proceso de descomposición social: agudización y extensión de la pobreza, incremento de la marginalidad en amplios sectores de población e intensos procesos de migración interna e internacional (Cuadra, 2002). Sin embargo, a mediados de los años 90, la tasa de homicidios comenzó a descender por la estabilización política y económica del país, sumado al trabajo de la Policía. En este aspecto, Nicaragua comenzó a distanciarse aún más del resto de Centroamérica en materia de violencia y de seguridad, lo que ha hecho del país un caso excepcional para muchos especialistas en el tema.

1.3. La singularidad de Nicaragua: la refundación del Estado

A pesar de la continua historia de violencia en Nicaragua, el país es considerado un caso excepcional por algunos investigadores que han estudiado comparativamente el tema de la seguridad y el fenómeno de la violencia en la región (Cruz, 2003; Córdoba, 2012; Zinecker, 2012; Hunh, 2008; Dammert, 2012; Briceño-León, 2007). Zinecker (2012) sostiene que Nicaragua es un caso singular, dado que es un país con bajos niveles de violencia letal, pero a su vez con serios problemas de desigualdad, con ínfimo bienestar social y con una frágil democracia, como los tres países caracterizados por altos niveles de violencia mortífera: El Salvador, Guatemala y Honduras.

Las opiniones de los ciudadanos centroamericanos sobre los principales problemas que los aquejan, reflejan las diferencias entre los países (*ver Cuadro 1.3.1*). El orden de los países por preocupación de su ciudadanía ante el crimen y la violencia es el siguiente: El Salvador, 42.9%; Costa Rica, 35.05%; Guatemala, 32.4%; Panamá, 21.69%; Honduras, 12.98%, y Nicaragua, 6.63%. Gran parte de esta situación puede explicarse por el impacto objetivo o di-

recto de la violencia, como en los casos de El Salvador y de Guatemala, pero en otros países como Costa Rica y Honduras por aspectos más subjetivos, ya que su comportamiento es atípico (Costa Rica, con bajos índices de violencia, presenta niveles de percepción de inseguridad muy altos, mientras que Honduras, con los más altos índices de violencia, muestra una percepción baja). En el caso de Nicaragua, es notable que las principales preocupaciones de la ciudadanía son económicas, en especial las que tienen que ver con el desempleo y el alto costo de la vida, el crimen y la violencia constituyen una problemática aún relegada en estos momentos por la ciudadanía.

La Revolución disolvió totalmente los órganos de represión de la dictadura --la Guardia Nacional, sus cuerpos élites y paraestatales--, y refundó un nuevo Estado con un orden jurídico y con una Policía y un Ejército caracterizados por su origen social, nutrido por la participación activa de las organizaciones sociales. Este contexto consolidó los niveles de organización comunitaria y propició la proliferación de una gama de organizaciones sociales y de redes que se involucraron en las diversas tareas y demandas que requirió la sociedad nicaragüense en la construcción del proyecto político revolucionario.

Dicho esto, la singularidad de Nicaragua se podría explicar por dos aspectos: (1) institucionales y (2) sociales, derivados del proceso de refundación del Estado, que garantizaron un control de la violencia social a través de la Policía y de la organización comunitaria. Lo anterior no tuvo igual éxito en las negociaciones y en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en El Salvador (1992) y en Guatemala (1996). Concretamente, la depuración y las reformas policiales que se implementaron en ambos países tuvieron como objetivo crear una institución democrática con mayor cercanía a la comunidad, y con enfoque preventivo, que no fue apoyada políticamente, lo que la llevó al fracaso. En estos países, a pesar de las iniciativas, prevaleció el modelo policial con algunos vicios

Cuadro 1.3.1: Principales problemas que percibe la ciudadanía en Centroamérica

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nicaragua	37.59	30.24	6.63	4.82	3.73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costa Rica	12.31	10.01	35.05	N/A	N/A	12.31	5.28	N/A	N/A	N/A
El Salvador	24.48	10.87	36.04	8.94	N/A	N/A	N/A	6.05	N/A	N/A
Guatemala	11.98	8.88	27.59	9.83	N/A	N/A	N/A	7.81	N/A	N/A
Honduras	N/A	9.62	12.98	10.54	N/A	28.74	N/A	N/A	5.21	N/A
Panamá	8.70	N/A	21.69	N/A	15.76	12.99	N/A	N/A	N/A	10.21

Nota: 1, Economía; 2, Desempleo; 3, Delincuencia, Crimen; 4, Pobreza; 5, Inflación; 6, Corrupción; 7, Drogas; 8, Violencia; 9, Caminos en mal estado; 10, Falta de agua. Nota: N/A - No Aplica

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta Barómetro de las Américas (2012) para cada país.

del pasado. Según Frühling (2005), esto ha tenido como resultado la falta de separación entre la Policía y las Fuerzas Armadas, y el hecho de que esta institución ha respondido más a las necesidades de los gobiernos que a las de los ciudadanos. Esto contrasta con el caso de Nicaragua, donde la Policía tiene un enfoque más preventivo, pues la institución, durante su creación en la Revolución Popular Sandinista, se concibió como una antítesis de la Guardia Nacional somocista, que basaba su accionar en la represión. Había un contexto en el que todas las instituciones del Estado trabajaban de forma conjunta con las organizaciones sociales, comunitarias y políticas, muchas veces con voluntariado, colaboración, etc.

Origen social y enfoque preventivo de la policía

Las virtudes del modelo policial en Nicaragua son las sinergias que ha construido con las demás instituciones del Estado y con la comunidad organizada. Según la Policía, su modelo es preventivo, proactivo y comunitario. La prevención se ha trabajado porque la institución considera que la violencia es un problema social y multicausal, no solo policial. La institución concibe la proactividad como la toma de iniciativas que anteceden a la violencia y no solo reaccionan ante esta. El modelo es comunitario porque la Policía está arraigada históricamente en la sociedad, lo que permite contar con altos niveles de confianza y con un aparato de inteligencia fuerte que le ayuda en la prevención.

Otra fortaleza del modelo policial nicaragüense es que la institución es una sola y actúa como un sistema que articula tres subsistemas: 1) sistema policial con sus distintas especialidades (Seguridad Pública, Asuntos Juveniles, y Comisarías de la Mujer y la Niñez), 2) sistema de prevención estatal (ministerios de Educación, Familia, Juventud y Mujer, entre otros), y 3) sistema de prevención social. Dado que para 2010, según declaraciones de la Primer Comisionada Aminta Granera, Directora Gene-

ral de la Policía Nacional, existían más de "100 mil personas que de forma voluntaria trabajan día a día con la Policía Nacional en los "Comités de Prevención Social del Delito (CPSD), Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC), Jóvenes desmovilizados de las pandillas juveniles, Promotoras Voluntarias de las Comisarías de la mujer, Brigadas Estudiantiles de Tránsito, Estudiantes universitarios y las iglesias" (Pichardo 2010, parr.5).

Aspectos socioculturales de la sociedad nicaragüense

En distintos momentos, la sociedad nicaragüense ha asumido iniciativas de reivindicación de sus derechos, que le ha conllevado a jugar un papel en la definición de su propia historia, sobre todo en momentos críticos. Hay dos precedentes en los que la voluntad colectiva de la mayoría de los nicaragüenses ha incidido en sus coyunturas: el involucramiento y apoyo a la lucha contra la dictadura --que culmina con el triunfo de la Revolución Sandinista-- y los resultados de las elecciones presidenciales en febrero de 1990, que aceleraron el proceso de pacificación. El primero se traduce en un rechazo rotundo al arraigado sistema de corrupción y de terrorismo de Estado de la dictadura somocista. Es probable que esta efervescencia social, además de la participación de sindicatos, de organizaciones estudiantiles y de cooperativas, entre otros, haya sido avivada, entre otros factores, por la posición crítica de la Conferencia Episcopal³ y de líderes religiosos de otras iglesias, como la Bautista, frente a los abusos del régimen somocista, condenando las estructuras sociales que generaban pobreza y desigualdad en el país. Según Ferrero (2010), de 1971 a 1978:

³ Pocas veces una Conferencia Episcopal de un país latinoamericano se han pronunciado desde la doctrina social de la Iglesia, con tanta claridad, a favor del uso legítimo de la insurrección en contra de una dictadura, y ha denunciado las estructuras de pecado y de opresión contra un pueblo.

Las Cartas Pastorales cada vez hablaban más de la “necesidad de ser sujetos de la Historia”, del deber de crear “estructuras justas” y de la “responsabilidad social de los cristianos”. Cada vez más se reclamaba a los fieles el deber de contribuir a una más justa distribución de la riqueza y ello influyó sobremanera en el planteamiento de compromiso cristiano de muchos de sus seguidores. (p. 456)

Pérez Baltodano (2008) cita la Carta Pastoral que, en esta misma línea, publica la Conferencia Episcopal el 2 de junio de 1979, la cual formula claramente la posición de la Iglesia sobre el legítimo derecho del pueblo de luchar en contra la dictadura en ese momento:

A todos nos duelen y afectan los extremos de las insurrecciones revolucionarias, pero no puede negarse su legitimación moral y jurídica en el caso de tiranía evidente y prolongada, que atente gravemente a los derechos fundamentales de la persona o dañifique el bien común del país. (p. 569)

Aunque lo religioso no ha sido ampliamente investigado como un elemento sociocultural en su relación con la violencia y con la construcción de paz en Nicaragua, no se debe obviar su naturaleza configuradora del conjunto de las dimensiones humanas de los nicaragüenses, sobre todo en la esfera de lo político (Aguirre y Sánchez, 2014).

El segundo precedente histórico es la dimensión socio-cultural, pues en Nicaragua el conflicto bélico no terminó como producto de un acuerdo de paz entre las élites, a diferencia de lo ocurrido en El Salvador y en Guatemala, sino que se dio a través de la amplia voluntad colectiva expresada en los resultados de los comicios presidenciales de 1990. Sobre esta situación, Cuadra argumenta en comunicación personal, en 2014, que:

Este hecho tiene un peso simbólico, primero porque la gente [estaba] expresando un claro mensaje a las fuerzas políticas: “no a la guerra”, y segundo, porque desplazó a los actores militares, tanto el Ejército como la “Contra”. Es decir, los desplazó del protagonismo político, caso que no ocurrió ni en El Salvador ni en Guatemala.

Es importante señalar que no solo en Nicaragua se han desplegado iniciativas cívicas de carácter pacífico y emancipador, sino también en otros países de la región como El Salvador, donde el movimiento no violento de mayo de 1944, a través de una prolongada “huelga de brazos caídos”, logró derrocar a uno de los peores dictadores de la región, el general Maximiliano Hernández Martínez. Según Parkman (2003), “esta huelga cívica fue más que una oleada espontánea de indignación pública. Fue reflejo de la evolución de una sofisticada estrategia y de tres semanas de trabajo intensivo de organización” (p. 204), que fue articulando un conjunto de actores de la sociedad salvadoreña. Estos precedentes históricos que se han dado en Centroamérica plantean la necesidad de incluir aspectos culturales y políticos que han detonado tanto la violencia como acciones de construcción de paz en el marco de procesos reivindicativos, de tal forma que se vea fortalecida la estrecha relación entre ciudadanía, seguridad --en un sentido integral-- y paz.

Considerando el contexto de violencia en Nicaragua y en Centroamérica, se explicará, a través de unos breves apuntes, cómo se ha entendido este fenómeno, con el fin de orientar el análisis que se formula en este estudio.

*La violencia colectiva fue en gran medida
una consecuencia de la creación del Estado.
La formación del Estado y el desarrollo del capitalismo
se entrelazaron tan estrechamente
que resulta difícil aislar sus efectos.
Chales Tilly*

II. ¿CÓMO ENTENDER LA VIOLENCIA EN NICARAGUA?

2.1. Apuntes teóricos para un estudio sobre las violencias en Nicaragua

Investigadores sociales que han estudiado el fenómeno de la violencia, han consensuado claramente dos aspectos que le son inherentes: su complejidad y su naturaleza polifacética, los cuales hacen difícil su estudio y su correspondiente discernimiento de las diferentes manifestaciones, características, factores de riesgos y sus consecuencias (Morrison, Buvinic y Shifter, 2005; Frühling, Tulchin y Golding, 2005; Martín-Baró, 2012). Desde esta perspectiva se considera importante tener en consideración tres presupuestos sobre la violencia planteados por el mártir y psicólogo social, Martín-Baró (2012):

Primer presupuesto. Asumir que “no sólo hay múltiples formas de violencia cualitativamente diferentes, sino que los mismos hechos tienen diversos niveles de significación y diversos efectos históricos” (p. 365). Se trata de un abordaje integral de la violencia como un hecho objetivo y como un constructo desde la perspectiva del sentido social, dado que la violencia se percibe y se evalúa de forma diferenciada según su contexto histórico, social y cultural (Huhn, Ottler y Peetz, 2007). Esto cobra relevancia en sociedades posconflictos, como es el caso de Nicaragua y de los demás países del norte de la región, que han transitado por períodos intensos de violencia y de conflictividad política.

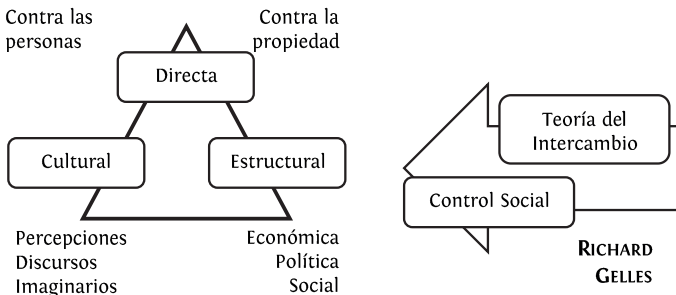
Segundo presupuesto. Aunque los estudios de violencia traten de abordar sus diversas manifestaciones o se enfoquen en perspectivas relativamente englobantes, siempre será una visión parcial y limitada. En esta línea, Martín-Baró (2012), advierte que cualquier presunción de absolutización conllevaría a un reduccionismo que por efecto tendría el riesgo de amparar “una peligrosa ideologización, celestina de la violencia promovida por los intereses sociales dominantes” (p. 365). Como se podrá constatar, hay formas de violencia cultural y política que tienen un carácter instrumental, que están dirigidas a ejercer el control y la sanción de conductas o acciones individuales o colectivas que se consideren “desviadas” dentro del orden ideológico, sistema político, social o moral, de tal forma que se justifiquen o legitimen mecanismos a través de los cuales se ejercen las distintas formas de violencia orientadas a mantener el orden establecido de los grupos hegemónicos.

Tercer presupuesto. La violencia no se puede entender fuera de su contexto social, político, cultural y económico dado su carácter histórico, y el contexto en el que se produce y justifica. Esto plantea, Martín-Baró (2012), el reto de analizar la “violencia en el marco de los intereses y valores concretos que caracterizan a cada sociedad o

grupo social en un momento determinado (p. 371). Históricamente, muchas de las manifestaciones de violencia que han marcado a la sociedad nicaragüense están relacionadas o asociadas con la forma como los diversos actores han gestionados o resuelto sus conflictividades, cuyos derroteros han tenido consecuencias diferenciadas y multidimensionales en el presente.

Partiendo de estos presupuestos, se asume en esta investigación el planteamiento de Galtung (1969), que concibe la violencia como un fenómeno multidimensional, que incorpora elementos estructurales y culturales. A juicio de Serbín (2008), esta definición permite diferenciar los tipos de violencia y evita postular “un tipo ideal de violencia, a partir de la identificación de [sus] espacios construidos históricamente por las sociedades” (p. 17). Galtung (1998) materializa su teoría sobre la violencia en tres dimensiones: (1) violencia directa, (2) violencia estructural y (3) violencia cultural (*ver Figura 2.1.1*). Estas dimensiones se explican a través del esquema del triángulo de la violencia, desde dos perspectivas, una visible o evidente y otra invisibilizada, obviada o soslayada.

Figura 2.1.1: Teoría del estudio



JOHAN GALTUNG

Fuente: Elaboración propia a partir de Galtung (2003) y Gelles (1983)

La *violencia directa* es la forma más evidente de las violencias, sus expresiones pueden ser físicas, verbales o psicológicas. Se ha estudiado ampliamente este tipo de violencia, porque, por lo general, las personas suelen tener mayor conocimiento y conciencia de sus manifestaciones, dado su impacto directo. Sin embargo, hay expresiones de la violencia directa que no son identificadas como tales, pues han sido naturalizadas o invisibilizadas, y en algunos casos normalizadas, según el contexto, las características socioculturales, y los factores ideológicos e históricos de los actores. De esta forma, la violencia se sitúa más en la superficie o área visible del iceberg del sistema de violencia (parte superior del triángulo). Cuando no se profundiza en las dimensiones culturales y estructurales de los tipos de violencia, se tiene el riesgo de desarrollar un análisis reducido, superficial y poco transformador de estos, por tanto, se requiere de un planteamiento integral que considere la interacción de estas dimensiones o microsistemas de la violencia. Esta ha sido una de las tareas pendientes de las ciencias sociales en el estudio y en la transformación de la violencia en Nicaragua y en Centroamérica.

La violencia estructural “trata de la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos” (Calderón, 2009, p. 75). Según Serbín (2008), esta es la forma de violencia más extendida y relacionada con las causas profundas y menos visibles de un conflicto social y del iceberg de la violencia, porque “se sustenta en la desigual distribución de la riqueza y del poder” (p. 19). Es ejercida por minorías hegemónicas o grupos dominantes (públicos y privados), y se caracteriza porque genera múltiples brechas o desigualdades en una sociedad, afectando la satisfacción de necesidades o la realización plena de los derechos de sus miembros. La violencia estructural se encuentra arraigada en las diversas estructuras e instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, desde las cuales se ejerce y se generan otras formas de violencia. Por lo general, los afectados no perciben este tipo de

violencia como tal ni están conscientes de que muchas situaciones de privación o de vulneración de sus derechos son producto de condiciones estructurales e históricas: precariedad y flexibilización laboral, implementación o ausencia de políticas públicas, e impacto de ciertas dinámicas económicas de acumulación y exclusión, entre otras.

La *violencia cultural* constituye el conjunto de representaciones, discursos y expresiones culturales, religiosas e ideológicas que justifican o legitiman la violencia directa o estructural. Según la hegemonía de estos imaginarios, ambas violencias se pueden llegar a institucionalizar. Por lo general, la violencia cultural corresponde al ámbito sumergido u oculto del iceberg de las violencias, se trata de un fenómeno complejo de estudiar. Muchas de sus expresiones fluctúan a través de la ideología. Esta última juega un rol estratégico en la conservación y en la reproducción de cualquier sociedad. En sociedades estructuralmente injustas, la ideología tiene la función de representar los intereses de los grupos dominantes y de justificar el orden o el sistema establecido, deformando la realidad a través de representaciones que, según Ellacuría (1982):

Lejos de ser un reflejo objetivo de lo que es la sociedad desde el punto de vista de lo que idealmente se está profesando como bueno y verdadero, es un reflejo distorsionado de la misma sociedad, que no permite verla en su realidad plena (citado en Samour, 2003, p. 250).

El ejercicio de esta violencia es de lo más extensivo y difuso, se trata de una violencia socialmente aprendida, que suele ser transmitida generacionalmente de manera consciente o inconsciente. Partiendo de este planteamiento teórico, se entenderá por violencia *toda acción u omisión intencionada que afecta la integridad física, psicológica y moral, y que además limita la realización de las*

potencialidades de personas o grupos sociales. Consciente de las limitaciones propias del estudio y del propósito de realizar una aproximación al fenómeno de la violencia en estas tres dimensiones, interesa precisar tres formas de violencia que, por naturaleza, integran la dimensión estructural y cultural: discriminación, pobreza, y violencia política y económica.

La *discriminación* es un fenómeno social que se gesta y se manifiesta a través de usos y prácticas sociales entre personas y grupos. Según Rodríguez (2006), se trata de una conducta con las siguientes características:

Culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (p. 26).

Por su carácter privativo, la discriminación afecta el acceso a oportunidades de desarrollo de personas o de grupos sociales, lesiona la confianza y la cohesión entre los miembros de la comunidad o del contexto societal en el que se ejerce, y como forma de violencia, uno de sus efectos es la erosión del tejido social. La discriminación puede estar motivada por prejuicios o por estigmas relacionados con el origen de clase, etnia, filiación religiosa, edad, género, preferencias políticas y sexuales, y por condición de salud, entre otras. En este sentido, la discriminación constituye una forma de violencia cultural, dado que la exclusión --o el hecho discriminatorio-- se naturaliza o se justifica sobre la base de representaciones, imaginarios o elementos identitarios que sobrevaloran a un determinado tipo de personas o de grupos, y desprecian o infravaloran a otros. Cuando estas prácticas y usos sociales se sedimentan y se transmiten generacionalmente en una cultura, se institucionalizan y

se consideran expresiones de violencia estructural, sin que pierdan su dimensión cultural.

Ahora bien, la discriminación con motivaciones políticas e ideológicas se sumerge en el campo de las fronteras y del poder, que a juicio de Robin (2009) se está constituyendo en uno de las interrogantes más apremiantes de la política, en especial, sobre la pertenencia y la exclusión. En esta línea, Miller (1995) reitera que lo que importa más es saber hasta dónde llegan las fronteras del Estado, y con ello a quién se incluye y a quién se excluye. Si bien esta dinámica puede estar marcada y tonificada por aspectos subjetivos, sus efectos pueden tener repercusiones y consecuencias reales o prácticas. Como advierte Lohmann (1996), la discriminación con motivaciones políticas genera “ineficiencias en el efecto distributivo de las políticas públicas, sobre todo cuando se da una asignación de recursos públicos en forma preferencial a grupos o a individuos que no necesariamente deberían ser focalizados por las políticas públicas” (citado en García, 2011, p. 5). Se puede afirmar que las fronteras de la violencia política son muy tenues y abarcadoras, y van desde mecanismos de coacción y de miedo político, hasta formas abiertas y extremadamente represivas, cuyo común denominador es su naturaleza instrumental, y su objetivo es garantizar un propósito que responda a los intereses de los grupos dominantes.

En el caso de la *violencia política*, Sheldon Wolin (1960) señala que a partir de la teoría del Estado liberal, se ha justificado la violencia como una medida necesaria para la continuidad de un orden jurídico que garantizara el “bien común”. En palabras de Weber (1919), el “Estado es la única fuente del derecho a la violencia” (citado en Schnyder, 2011, p. 37). A partir de esto, se fue dando una progresiva metamorfosis de la violencia de Estado en poder público.

Desde la perspectiva histórica, es importante señalar que a pesar de las distintas transiciones hacia la democracia en América Latina, autores como O'Donnell (2011) y Rivera (2009) señalan que el retorno al constitucionalismo democrático no ha logrado erradicar las prácticas autoritarias presentes en el Estado y en la sociedad, pues según Pinheiro (2002), “incluso gobiernos civiles no han podido controlar el abuso de poder y combatir la impunidad” (p. 17). Dicho esto, se asume lo planteado por Ortiz (2012), quien argumenta que la violencia política es:

El medio de lucha político y social que se hace con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado (p. 141).

Uno de los mecanismos más recurrentes de esta forma de violencia es la represión. Según Ortiz (2012) “el recurso a la represión estatal suele tener como objetivo en la mayoría de los casos, impedir que la población se organice para oponerse al régimen, o que otorgue su apoyo a un grupo de oposición ya existente” (p. 140). El ejercicio de la represión está relacionado con lo que Robin (2009) define como la función ejemplarizante del miedo político, que “no es acabar con el individuo, sino tomarlo como ejemplo, mandar el mensaje de que debemos tener cuidado o podríamos ser el siguiente” (p.338). Según Tilly (1978), desde la perspectiva de la acción colectiva:

La represión es un incentivo selectivo de carácter negativo a la participación en un movimiento, ya que hace aumentar los riesgos y costes de la acción colectiva para los contendientes, en sus dos principales condiciones: la organización de la pro-

testa y la movilización de la opinión pública (citado en González, 2006, s. p.).

En las democracias postransicionales, Davenport (1996) y Schedler (2007) plantean que el uso de la represión ya no se estudia como una patología típica y exclusiva de los países autoritarios, sino más bien, como un mecanismo político orientado a satisfacer la adquisición o el mantenimiento de los intereses en juego, sea por motivos de estabilidad o como medio de control autoritario. En estos escenarios, según Tilly (1978), la violencia política, además de ser vertical es horizontal, pues la contienda política también se da entre grupos que no pertenecen a los espacios de poder gubernamental.

Sobre la *violencia económica* se destaca la pobreza, que es un problema multidimensional y multicausal en el que confluyen factores de carácter económico, social, político, cultural y étnico, que privan de manera continua el acceso a recursos, a capacidades y a espacios para la participación y el desarrollo de una vida digna. En este sentido, la pobreza como privación o negación de derechos constituye una forma de violencia estructural que no solo afecta las necesidades materiales, sino también culturales. Según Serra (2011), la pobreza se conceptualiza como:

una construcción social donde operan factores objetivos, por ejemplo las relaciones sociales, las instituciones económicas y políticas, pero también intervienen elementos subjetivos como las representaciones sociales sobre los factores determinantes de la pobreza y las capacidades locales [y nacionales] para superarla (p. 15).

A nivel general, Pérez-Sáinz (2014) señala que “el factor determinante de la pobreza es la desigualdad [y que] el crecimiento económico y la modernización no la redu-

cen, porque el modelo imperante en América Latina ha sido y segue siendo concentrador y excluyente” (p. 29).

Finalmente, se agrega el planteamiento de Gelles (1983) sobre la teoría del intercambio y del control social, que plantea que las personas con mayor integración a redes sociales son menos propensas a sufrir violencia, y suelen ser más resilientes cuando la padecen. En cambio, las personas que no cuentan con estas redes son más vulnerables, y poseen menor resiliencia a la violencia.

Descritos los principales apuntes teóricos con los que se abordan los tipos de violencia, en el siguiente apartado se describe la metodología con la que se realizó el estudio.

2.2. ¿Cómo se estudió la violencia y la seguridad en este estudio?

Para lograr comprender la dinámica entre violencia y ciudadanía se requiere entender las múltiples formas en que estas se presentan, y cómo se producen y se reproducen las experiencias y prácticas en torno a estos fenómenos, así como los imaginarios al respecto. Para lograr concretar los objetivos de investigación se parte de dos esquemas metodológicos comúnmente compartidos dentro de las ciencias sociales: (1) metodología cuantitativa y (2) metodología cualitativa, conjugando el papel teórico y empírico de los fenómenos que se abordarán (Sautu, 2003).

Con la metodología cuantitativa se trata de cuantificar los niveles de percepción y de victimización de la ciudadanía. En cambio, con la metodología cualitativa se intenta recopilar los planteamientos de la ciudadanía, específicamente cómo las personas interpretan o naturalizan la violencia y la seguridad. Estas metodologías no son excluyentes, y su integración brinda un análisis más contundente de la violencia y de la seguridad, pues se

abordan sus aspectos objetivos y subjetivos. Para lograr esa integración se emplearon instrumentos de análisis cuantitativo (encuestas) e instrumentos de análisis cualitativo (entrevistas y grupos focales).

La encuesta del estudio parte de una muestra aleatoria, probabilística y estratificada. Es *probabilística*, porque en cada una de las etapas se utilizan métodos aleatorios de selección, que permiten hacer inferencias a la población con base en la teoría de probabilidades. Es *estratificada*, porque previo a la selección de las unidades muestrales, la población se dividió por departamentos, municipios, y zonas urbanas y rurales.

El tamaño de la muestra aleatoria estratificada se calculó con la fórmula:

$$n = \frac{N \sum N_h \hat{p}_h \hat{q}_h}{N^2 D + \sum N_h \hat{p}_h \hat{q}_h}$$

Con $D = \left(\frac{E}{z}\right)^2$ con un valor de p y q fue de 50%, asumiendo el aumento en el tamaño de la muestra.

Donde:

- N: Tamaño de la población
- z: El valor crítico de la curva normal para un intervalo de 95% de confianza.
- E: Error máximo de estimación para la variable de interés, considerado como el 2.5%.

El resultado del tamaño de la muestra fue de 1,534 viviendas, posteriormente se agregó el 4.5% sobre esta muestra en cada departamento para compensar el posible error de muestreo, y así el tamaño definitivo de la muestra fue de 1,620 viviendas. En el cuadro 2.2.1 se pre-

senta la cantidad de viviendas que se muestrearon en el estudio, que parte de los datos censales proporcionados por el Instituto Nacional de Información para de Desarrollo (INIDE). El marco muestral fue constituido por las viviendas ocupadas de un determinado municipio en un departamento específico.

Cuadro 2.2.1: Distribución del tamaño de la muestra por departamentos.

	Estratos	# de viviendas	Tamaño de muestra	# de viviendas total agregando 4.5% por el error de muestreo	Peso
1	Nueva Segovia	40,723	64	67	4%
2	Jinotega	59,718	94	98	6%
3	Madriz	24,932	39	41	3%
4	Estelí	40,537	63	66	4%
5	Chinandega	73,608	115	120	8%
6	León	72,009	113	118	7%
7	Matagalpa	88,410	138	145	9%
8	Boaco	28,861	45	47	3%
9	Managua	243,295	381	398	25%
10	Masaya	55,100	86	90	6%
11	Chontales	30,250	47	50	3%
12	Granada	31,973	50	52	3%
13	Carazo	33,132	52	54	3%
14	Rivas	32,026	50	52	3%
15	Río San Juan	17,852	28	29	2%
16	R.A.A.N	51,692	81	85	5%
17	R.A.A.S	55,412	87	91	6%
	Total	979,530	1,534	1603	100%

Se decidió no muestrear los municipios con un tamaño de muestra inferior a 10 viviendas. Las viviendas que correspondían a estos municipios fueron redistribuidas de manera proporcional entre los municipios restantes. En

total, se muestrearon 45 municipios de los 153 del país (29.4%). De igual forma, el cuadro 2 muestra la distribución de la muestra por municipios, y por zonas urbana y rural. En la especificación del muestreo, se establece que los datos a nivel poblacional se derivan de una composición estadística. Para lograr extrapolar los datos del muestreo a las características nacionales de la población, se incorporó una variable peso que sirvió como factor de expansión.

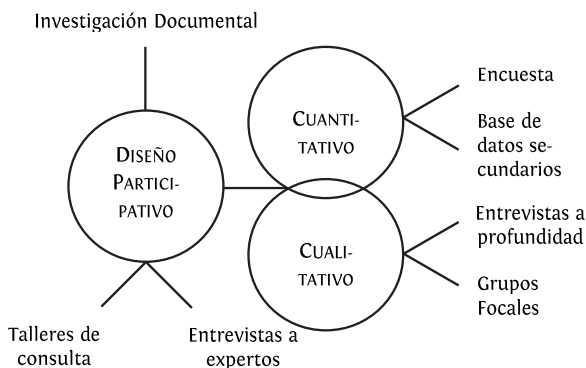
En el caso de la metodología cualitativa se utilizaron dos instrumentos. En primer lugar, entrevistas a expertos⁴ sobre los fenómenos, y, en segundo lugar, grupos focales en determinadas zonas del país. Estos instrumentos permiten profundizar elementos no observados en la metodología cuantitativa. Se entrevistó a expertos para consultarles sobre la metodología que se debía utilizar, y sobre los principales debates en torno a la violencia y a la (in) seguridad. De igual forma, se abordó la situación actual de Nicaragua en comparación con el resto de los países de Centroamérica. A partir de estas consultas se afinaron los instrumentos de recolección de información.

Con los grupos focales se realizó un contraste sobre la información cuantitativa para captar las particularidades territoriales. Estos permiten distinguir el comportamiento de la violencia y de la inseguridad, pues en distintos territorios el mismo fenómeno se puede llegar a interpretar de manera diferente, debido a las nociones y al contexto que las condicionan. Se realizaron seis grupos focales en igual número de territorios --Managua, León, Matagalpa, Estelí, Granada y Nueva Segovia--, por presentar, estos, información relevante dentro del análisis cuantitativo.

⁴ José Miguel Cruz, Jeannette Aguilar, Roberto Orozco, Elvira Cuadra y Mónica Zalaquet.

Para lograr ilustrar los componentes cualitativos y cuantitativos, en la figura 2.2.1 se presenta la metodología utilizada. Con el diseño participativo se integró en el estudio la perspectiva de expertos en el tema, y, así mismo, la visión de organizaciones de la Sociedad Civil al respecto. Este diseño participativo se integró con el análisis cuantitativo y cualitativo, que sirvió de soporte entre los aspectos teóricos y los datos recolectados en la investigación.

Figura 2.2.1: Metodología de la investigación



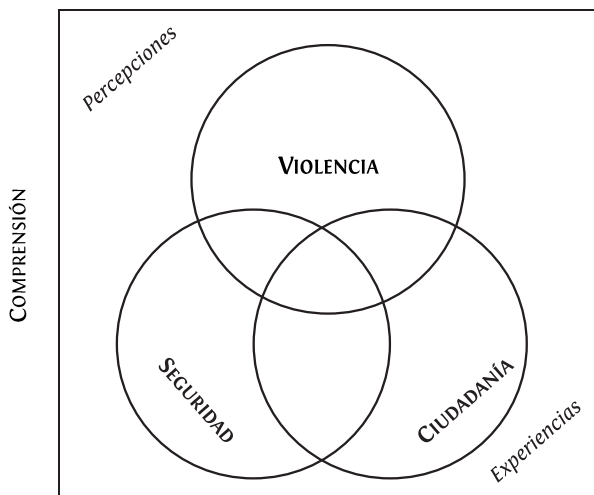
Fuente: Elaboración propia.

Del diseño participativo se desglosan el análisis cuantitativo y el cualitativo. Los datos primarios del estudio parten de la encuesta realizada y de los grupos focales, mientras que los datos secundarios se derivan de distintos datos oficiales y de investigaciones sobre el tema.

A efecto de esta investigación, se usó el método comprensivo, que estudia la "construcción social del sentido de las acciones" (López, 2008, parr.9), que permite entender cómo la ciudadanía construye los sentidos de violencia y seguridad, y cuál es el trasfondo de sus percepciones y experiencias. Esto permite articular la

violencia, seguridad y ciudadanía a partir de las percepciones y experiencias de los sujetos (ver Figura 2.2.2).

Figura 2.2.2: Características del estudio conforme a la violencia



Fuente: Elaboración propia.

Explicado las formas en cómo se estudia en esta investigación la violencia en el siguiente apartado se explicará el contexto socio económico de Nicaragua y los principales resultados del estudio.

Excurso: Principales características de los encuestados

Del total de encuestados, el 68% fueron mujeres y el 32% hombres. Como se describió en la metodología, se creó un factor expansión para corregir el posible sesgo de selección muestral. Al introducir este factor, los datos muestrales lograron ajustarse, permitiendo llegar a los datos poblacionales, los cuales, a su vez, coinciden con las estimaciones realizadas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) para 2013. El factor se creó a partir de la metodología elabo-

rado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (2004). Por tanto, el porcentaje de hombres y de mujeres cambió, llegando a 49.52% y a 50.48%, respectivamente. Desagregando la población por grupos etáreos, se observa que la edad del 25.68% oscila entre 16-25 años, la del 23.27%, entre 26-35 años; el 19.44% se encuentra en el grupo de mayores de 56 años; el 17.35% lo componen personas de entre 36-45 años, y el 14.26% tiene entre 46-55 años. Según estos datos, la población encuestada se caracteriza por ser relativamente joven, dado que el 48.95% es menor de 35 años. Si se sumaran a este grupo la población en edades de entre 36-45 años, llegarían al 66.3%, es decir, dos terceras partes del total de la muestra, frente a un 33.7% que se caracteriza por ser mayor de 46 años.

En términos educativos, el 36.4% manifestó haber alcanzado educación secundaria; el 26.1%, educación primaria; el 21.9%, nivel universitario; el 8% es posgraduado; el 6.6%, analfabeto; el 4.8% posee nivel técnico, y el 3.3% es alfabetizado. Al desagregar el nivel educativo por sexo, las mujeres tienen porcentajes levemente más altos que los hombres: en educación primaria 37% frente al 35.2% de los hombres, y en educación secundaria 26.8% frente al 24.6% de los hombres. En cambio, en la educación universitaria y técnica, el porcentaje de los hombres es mayor por una diferencia aproximada al 2% más que las mujeres: 22.8% frente a un 21.4%, y 6% frente al 4.2%, respectivamente.

Analizando los niveles educativos desagregados por zonas rural y urbana, se observa que prevalece la población urbana con los porcentajes más altos en educación universitaria (39.4%), secundaria (28.2%) y técnica (6.5%), frente al 31.8%, 12.1% y 2%, respectivamente, para la zona rural. En contraste, la población rural tiene niveles de educación más alta en primaria (36.5%, frente al 19.34% urbano), analfabeto (11.1% frente al 3.7% urbano) y alfabetizado (5.5% frente al 1.8%). Esto nos indica que las brechas educativas en la muestra son más notorias al desagregar la población por área urbana y rural, y en menor medida cuando se desagrega por sexo. Es posible que esto se explique porque los contextos, rural y urbano comportan niveles diferenciados de oportunidades para el estudio. Sin embargo, la mujeres siguen teniendo menos oportunidades que los hombres por múltiples factores socio-culturales y económicos, relacionados con la cultura del

machismo, la asignación de roles en el hogar y la discriminación laboral, entre otros.

Al preguntar por su práctica religiosa, el 49.75% manifestó ser católico, el 31.73% evangélico, un tercer grupo se identificó sin religión (13.09%), el 2.5% se identificó como cristianos sin definición o afiliación, el 1.85% como Testigos de Jehová, el 1.36% como adventistas, el 0.93% como moravos, el 0.6% como anglicanos, y el 0.37% como mormones. Tres datos llaman la atención: que en el universo religioso nicaragüense se destacan dos grupos creyentes, los católicos y los evangélicos, y un segmento que se declara no creyente o sin religión, los cuales se aproximan a los resultados de un reciente estudio realizado por el Latinobarómetro (2014, p.6), según el cual, en Nicaragua la población católica representa el 47%, el 37% es evangélica, y un 12% se declara sin religión.

Aspectos socioeconómicos

Según la opinión de los encuestados, en el liderazgo del hogar prevalece el papá, con el 49%, seguido por la mamá con el 30.02%, muy por debajo se encuentran el esposo (9.15%), el abuelo o la abuela (6.08%), la mamá y el papá (2.03%), el hermano (1.56%), el tío o la tía (1.27%), y la esposa (0.89%). El 44.8% de los encuestados trabaja, el 34% se dedica a los quehaceres del hogar, el 8.6% estudia, el 4.9% trabaja y estudia, el 3.9% es pensionado, el 2.2% no trabaja, y el 1.7% no trabaja ni estudia.

Al indagar el tema de la satisfacción, el 52.1% de los encuestados manifestó que el dinero le ajustó para satisfacer las necesidades en el último mes, frente a un 47.9% al que no le ajustó. Al cruzar esta variable con el ámbito rural o urbano, se constata la significancia estadística entre el porcentaje de personas que satisfacen sus necesidades según sus contextos. Concretamente, de los que afirmaron que les alcanzó el dinero del mes para satisfacer sus necesidades, el 65.6% eran de las zonas urbanas y el 34.4% eran de las zonas rurales. Es decir, que los hogares en el contexto rural son los que menos satisfacen sus necesidades, en parte, por el nivel de ingreso, por las pocas oportunidades de empleo y por los bajos salarios para el trabajador rural, que, desafortunadamente, se valora como una mano de obra poco calificada, a pesar de los riesgos laborales y el desgaste físico.

Entre las condiciones y procesos que promueven la centralidad o relevancia de la violencia colectiva se encuentran el nivel de tolerancia del régimen, la participación frecuente de especialistas de la violencia, el aumento de la incertidumbre y los obstáculos respecto del resultado de las reclamaciones y la activación o supresión de las identidades políticas.
Charles Tilly

III. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA (IN)SEGURIDAD EN NICARAGUA?

3.1. ¿A qué Nicaragua nos referimos en esta investigación sobre violencia?

Nicaragua ha atravesado distintos períodos de cambios en su estructura política, económica y social, que han marcado las percepciones y prácticas de los ciudadanos nicaragüenses en todos sus ámbitos. Históricamente, las economías centroamericanas han dependido del sector agropecuario en sus exportaciones e importaciones, generación de empleo, inversión y acumulación de capital (Segovia, 2004). Durante la década de los 50, muchos países latinoamericanos comenzaron un proceso de

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), del que Nicaragua formó parte en menor medida. Para 1960, Nicaragua contaba con una población urbana de 39.6%, y con un 56.1% de personas mayores de 15 años sin educación formal, lo que muestra que la “modernización” pregonada por la ISI no se visualizó claramente en esa década y en la posterior. Según Thiesenhusen (1994), para el período 1950-1970, en Nicaragua el 6% de los propietarios poseía el 41% de la tierra, mientras que el 58% solo contaba con el 2% de esta (citado en Indart, 2000), lo que refleja la persistencia de la desigualdad en la distribución de la tierra en el país.

En la década de los 80, el producto interno bruto (PIB) per cápita decreció en promedio 3.9%. Esta década trajo consigo un quiebre estructural marcado por la reforma agraria y por la nacionalización del comercio interno, trajo, además, altos niveles de inflación y un elevado gasto social. Entre los principales problemas se destacaron la crisis de la deuda (que fue un fenómeno que afectó a toda Latinoamérica), complicaciones económicas derivadas del embargo estadounidense que empezó en 1985, y los problemas económicos que ocasionó la guerra interna. A esto se le sumaron tasas de desempleo considerables y el deterioro de los servicios básicos (Acevedo, 1993). Para enfrentar estos problemas, desde 1987 se impulsaron políticas de ajuste estructural que fueron continuadas y radicalizadas en la década de los 90.

Las políticas de ajuste estructural de los años 90 priorizaron la privatización de empresas que antes estaban en manos del Estado, y el control de la presión inflacionaria heredada de los años anteriores. Esto tuvo como consecuencia en la producción (un crecimiento promedio de 0.61% para el período 1990-1995), y el aumento del subempleo y del desempleo de la población económicamente activa (Indart, 2000). Estas políticas se basaban en el Consenso de Washington y consistían en fomentar la apertura comercial, transformaciones en la política cam-

biaria, apertura de las cuentas de capital y reducción del sector público.

Las consecuencias de las políticas implementadas en los 90 fueron el establecimiento de una nueva forma de interpretar y de hacer política económica en el país. En este sentido, la acentuada privatización promulgó una (re)estructuración de la economía nicaragüense. Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), para el período 1990-2000, el país tuvo las tasas más altas de desempleo desde 1960, que fue cuando se comenzó a recabar sistemáticamente este dato, teniendo en promedio un 13.73% de desempleo, y llegando a su punto más alto en 1993, con 17.8%. En términos de crecimiento, entre 1990 y 1995 el PIB per cápita decreció en promedio 2.3%, mientras que en el período 1995-1998 creció en promedio 1.9%. Como consecuencias de esta situación (reducido crecimiento y alto endeudamiento), se buscó la incorporación del país a la Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), con el fin de condonar y de reestructurar completamente las deudas contraídas, y sanear las condiciones económicas del país.

Durante la década de 2000 se promulgaron planes estratégicos de distintos gobiernos que, aunque diferían en forma y fondo, tenían como principal objetivo la “reducción de la pobreza”. Hasta 2002 se impulsó un plan de desarrollo con políticas de Estado consistentes, el *Plan Nacional de Desarrollo* (2002-2007), que tenía entre sus ejes principales generar mayor competitividad entre los sectores económicos, y mayor atracción de inversiones para aumentar el crecimiento económico del país, y a partir de este generar un efecto derrame⁵ que beneficiara a todos los sectores. A pesar de estos esfuerzos, según las Encuestas de Medición del Nivel de Vida (EMNV) que

⁵ Se conoce como *Efecto Derrame* a que a partir del crecimiento económico de un país, parte de este llegará a los estratos más bajos o inferiores.

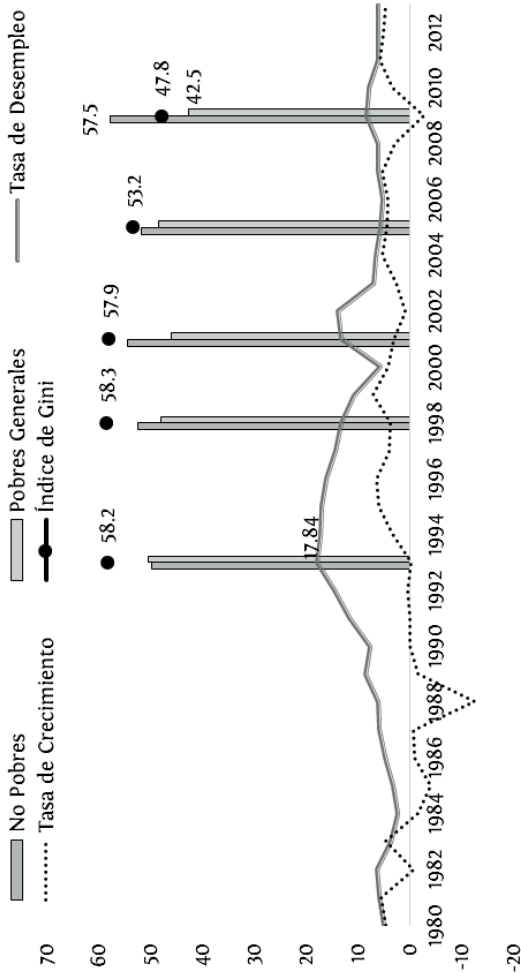
elabora el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) periódicamente, la pobreza aumentó de manera progresiva, pasando de 45.8% de la población total en 2001, a 48.3% en 2005 (ver Gráfico 3.1.1).

Seguidamente, para el período 2007-2012 se implementó un nuevo plan de desarrollo (*Plan Nacional de Desarrollo Humano*), que daba continuidad al plan anterior, y tenía como principal novedad la incorporación del concepto de desarrollo humano. Al igual que el plan anterior, este integraba la política fiscal, la política de inversión pública, la política monetaria y la política de inversión extranjera, entre otras. Por otro lado, este plan prestó mayor atención a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, acentuando los programas gubernamentales de alivio y de integración de la población vulnerable a las actividades socioeconómicas. Como uno de los principales resultados de estos planes en materia de desigualdad, fue que para 2001 el quintil más alto de ingresos concentró el 55.5% del ingreso del país, mientras que en 2009 esta concentración se redujo a 46%, equivalente a una disminución de 9.5%. Además, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2013), el Coeficiente de Gini⁶ de Nicaragua pasó de 0.532 en 2005 a 0.478 en 2009, lo que significó una reducción de la desigualdad.

Por otro lado, en términos de crecimiento económico, Nicaragua creció 5.7% en 2011, 5% en 2012 y 4.6% en 2013. En los últimos diez años (2004-2013) la tasa de desempleo se ha mantenido en un 6.3% promedio, bastante inferior a la presentada en la década de los 90 (una diferencia aproximada de 7%). No obstante, el principal inconveniente que han presentado estos planes de desarrollo en materia de empleo es que no solucionan el problema de

⁶ El Coeficiente de Gini mide desigualdad en un rango de entre 0 y 1, donde 0 significa plena igualdad y 1 completa desigualdad.

Gráfico 3.1.1: Nicaragua. Indicadores de crecimiento, empleo desigualdad y pobreza



Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del BCN e INIDE.

la falta de permanencia de los trabajadores dentro del mercado laboral, debido a que la política laboral solo se plantea incrementar el empleo y no que las personas puedan permanecer en el mercado laboral por un tiempo realmente considerable.

Según el Gobierno de Nicaragua, organismos internacionales (CEPAL, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) en los últimos años el país refleja un mejor desempeño económico en comparación con las décadas anteriores. Sin embargo, aún enfrenta muchos problemas producto de su estructura económica y social: desigualdad y exclusión social, con un 40.5% de personas que todavía viven en condiciones de pobreza (Fideg, 2014); alza de los precios y las deterioradas condiciones del mercado laboral, con una tasa de inflación de 5.7%, y tasa de desempleo de 5.9% para 2013 (BCN), entre otros. Esta situación muestra que la estructura económica y social de Nicaragua beneficia y perjudica de manera diferenciada a los ciudadanos, ya que existe la probabilidad de que distintos actores sociales queden relegados de los beneficios que el sistema genera, o que se les cargue todo el peso de sus problemas. Dicho esto, la necesidad de describir en términos generales la situación socioeconómica del país tiene como objetivo contextualizar la percepción y la victimización sobre la violencia que tienen los ciudadanos, lo cual se describirá en el siguiente apartado.

3.2. ¿Cómo perciben y experimentan las violencias y las (in) seguridades los nicaragüenses?

3.2.1. Violencia directa contra la propiedad y las personas

Como se explicó en el apartado teórico, la violencia se presenta de múltiples maneras, por tanto, en este apartado se hace referencia a la violencia directa contra la propiedad y a la violencia directa contra las personas (la violencia directa con motivaciones políticas se abordará

en el apartado de violencia política). Se analiza la victimización primaria y la secundaria, así como los casos de violencia que conoce el ciudadano. También se explica la vulnerabilidad de la población ante ciertos tipos de violencia, según sus características de género, zona de residencia (urbana o rural), ingresos y edad, entre otros; también ante el nivel de cercanía del victimario (conocido o desconocido) con la víctima, según el tipo de violencia.

Las características de la violencia son muy diversas, porque las formas como se manifiesta y sus contextos son diferentes. Siguiendo la operacionalización que se mencionó en el apartado teórico-metodológico, la violencia directa se compone de la siguiente manera: (1) *violencia directa contra la propiedad*, compuesta por el asalto, hurto, extorsión y estafa; (2) *violencia directa contra las personas*, conformada por la amenaza, maltrato físico y psicológico, violación sexual, secuestro, desaparición, trata de personas⁷ y homicidio; y (3) *violencia directa con motivaciones políticas*, compuesta por la intimidación, represión, detención y tortura. Es importante destacar que estos tipos de violencia directa tienen relación con la violencia cultural y estructural, pues se manifiestan en una historia y contexto que se interrelaciona con prácticas, percepciones, imaginarios y representaciones que la ciudadanía tiene sobre estos fenómenos.

En términos generales, según los datos de la encuesta «Comprendiendo la Violencia y la (In) Seguridad desde la Ciudadanía en Nicaragua», la ciudadanía tiene mayor conocimiento (ver Cuadro 3.2.1.1) de casos de violencia contra la propiedad (62.16%) que de casos de violencia directa contra las personas (52.17%) y de violencia directa con motivaciones políticas (16.17%). De igual forma, en cuanto a la victimización, la ciudadanía manifiesta ser

⁷ La trata de persona se aborda a nivel general, dado que se requiere de un estudio y metodología especializada para poder hacer inferencia sobre este tipo de violencia.

víctima mayormente de violencia directa contra la propiedad (17.39%), seguida de violencia directa contra las personas (7.78%) y violencia directa con motivaciones políticas (3.15%).

Cuadro 3.2.1.1: Conocimiento y victimización según violencia directa
(en porcentaje)

Conocimiento de casos de violencia directa		Victimización según violencia directa	
Contra la propiedad	62.16	Contra la propiedad	17.39
Contra las personas	52.17	Contra las personas	7.78
Con motivaciones políticas	16.17	Con motivaciones políticas	3.15

Fuente: *Elaboración propia a partir de la encuesta «Comprendiendo la Violencia y la (In) Seguridad desde la Ciudadanía en Nicaragua».*

Sobre la prevalencia de la violencia directa contra la propiedad frente a la violencia directa contra las personas, y la violencia directa con motivaciones políticas, se plantea que la violencia directa contra la propiedad se vuelve más frecuente cuando países con pasado de inestabilidad política y social superan estos contextos sin transformar las causas estructurales que generaron el conflicto armado, como sucedió en Nicaragua cuando predominó la violencia con motivaciones políticas propias de la guerra.

Al respecto, también se argumenta que la violencia política que afectó a Centroamérica a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI ha mutado en violencia contra las personas, lo que relativamente no ha sido el caso de Nicaragua⁸, pero sí el de El Salvador y el de Guatemala, y más recientemente el de Honduras, donde aunque no hubo un conflicto armado como el de sus vecinos, su

⁸ A inicios de los años 90, poco después del desmantelamiento del conflicto armado, se desarrollaron situaciones críticas entre recontras, recompas, revueltos y el Estado de Nicaragua, que eran síntomas de la violencia política. Además, se observó un repunte de expresiones de violencia social como se puede observar en el gráfico 1.

proceso de descomposición social y política se ha acelerado pronunciadamente en la última década. Sobre estas aseveraciones, es necesario indagar más a través de estudios especializados para validar o constatar estas intuiciones.

Cuadro 3.2.1.2: Conocimiento de casos de violencia y victimización (porcentajes)

Contra la propiedad	C ¹	V ²	Contra las personas	C ¹	V ²
Asalto	49,35	4,90	Secuestro	4,80	0,33
Hurto	36,76	7,52	Desaparición	4,07	0,30
Extorsión	3,24	0,41	Trata de personas	4,49	0,12
Estafa	15,1	4,40	Homicidio	21,79	0,33
Contra las personas			Motivación Política		
Amenaza	16,43	2,79	Intimidación	12,51	1,89
Maltrato Físico	27,64	1,43	Represión	9,70	0,93
Maltrato psicológico	14,99	1,88	Detención	7,72	0,32
Violación sexual	13,88	0,38	Tortura	3,34	-

Nota: ¹Conoce caso de violencia, ²Fue víctima de violencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta «Comprendiendo la Violencia y la (In) Seguridad desde la Ciudadanía en Nicaragua».

Violencia directa contra la propiedad

Analizando la *violencia directa contra la propiedad* (ver Cuadro 3.2.1.2), se observa que los casos más conocidos por la ciudadanía son los asaltos (49.3%), seguidos por hurto (36.76%), estafa (15.1%) y extorsión (3.24%). Al comparar los datos de conocimiento de casos de violencia directa contra la propiedad con los de victimización, se

nota una gran diferencia, pues el tipo de violencia directa contra la propiedad con mayor victimización son los hurtos (7.5%), les siguen los asaltos (4.9%), las estafas (4.4%) y las extorsiones (0.4%). Como se puede apreciar, hay dos diferencias importantes entre lo que manifiesta la ciudadanía como conocimiento de casos de violencia directa contra la propiedad y su victimización: primero, existe una brecha muy amplia entre conocimiento de casos y su victimización en todos los hechos de violencia directa contra la propiedad (ejemplo, entre victimización y conocimiento de casos de asaltos hay una diferencia de 44.45%); segundo, los casos de violencia directa contra la propiedad más conocidos son los asaltos, mientras que en victimización son los hurtos. Que el conocimiento de casos siempre sea mayor que la victimización se debe a que un mismo caso de violencia puede ser conocido por muchas personas, ya sea por su difusión cotidiana entre los ciudadanos o a través de los medios de comunicación, que según Huhn, Peetz y Oettler (2007) son una caja de resonancia con mucho impacto en las percepciones sobre violencia.

En cuanto a las características de las víctimas de violencia directa contra la propiedad (*ver Cuadro 3.2.1.3*) según victimización, la diferencia entre hombres (49.1%) y mujeres (50.9%) como víctimas de asalto es mínima, porque este tipo de violencia no discrimina por razones de sexo, pues es una forma de violencia instrumental que tiene como objetivo sustraer un bien, sin analizar quién lo posee. El asalto sí tiene particularidades con respecto al área de residencia, dado que se presenta más en zonas urbanas (81.4%) que en zonas rurales (18.6%). En el caso de los hurtos, la diferencia entre la victimización de hombres (45.6%) y de mujeres (54.4%) es un poco mayor y ronda el 8.8%. Al igual que el asalto, el hurto se manifiesta con mayor frecuencia en la zona urbana (65.9%) que en la zona rural (34.1%). Una de las explicaciones sobre el comportamiento de la victimización de asalto y de hurto según zonas de residencia, se debe a que las

zonas urbanas son más vulnerables a este tipo de violencia, porque los asaltos y los hurtos son cometidos por personas que las víctimas no conocen, y la ciudad es un espacio que se caracteriza por la interacción entre personas desconocidas (Briceño-León, 2007). Sobre este punto, según el conocimiento de casos de asalto (ver Cuadro 3.2.1.4) la mayoría son perpetrados por personas desconocidas (65.5%) y una menor parte por personas conocidas (34.5%); mientras que en los hurtos la diferencia es un poco menor, pues los hurtos cometidos por personas desconocidas son el 52.8% y los perpetrados por personas conocidas son el 47.2%.

Cuadro 3.2.1.3: Perfil del tipo de violencia a partir de victimización.
(en porcentajes)

		Asalto	Hurto	Extorsión	Estafa
Sexo	Hombre	49.1	45.6	58.5	48.9
	Mujer	50.9	54.4	41.5	51.1
Área	Urbano	81.4	65.9	31.3	50.3
	Rural	18.6	34.1	68.7	49.7
Quintil de Ingresos	1er	20.3	23.5	-	17.1
	2do	16.5	20.1	58.5	18.2
	3ro	16.9	15.1	31.3	16.4
	4to	13.4	20.4	0.0	28.9
	5to	32.9	20.9	10.2	19.4
Edad	16-25	37.1	19.8	0.0	15.7
	26-35	23.6	16.6	0.0	28.1
	36-45	13.9	18.0	10.2	19.2
	46-55	13.7	19.5	58.5	15.5
	56 +...	11.6	26.1	31.3	21.5

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta «Comprendiendo la Violencia y la (In) Seguridad desde la Ciudadanía en Nicaragua».

Un comportamiento distinto tiene la extorsión, pues es el tipo de violencia directa contra la propiedad, según el conocimiento de casos en los que el victimario es más conocido (60.87%). De igual forma, la extorsión, al contrario de los asaltos y de los hurtos, se presenta mayoritariamente en las zonas rurales (68.7 %). De los casos de extorsión, más de la mitad son cometidos contra hombres (58.5%) y un 41.5% contra mujeres. Ello se explica porque lo determinante en este tipo de violencia es la posesión de recursos económicos, lo cual, como se sabe, en el campo le pertenecen en su mayor parte a los hombres, pues en las zonas rurales las relaciones de poder patriarcales son más pronunciadas.

Cuadro 3.2.1.4: Perfil del victimario según conocimiento de violencia
(en porcentajes)

		Asalto	Hurto	Extorsión	Estafa
Victimario	Conocido	34.5	47.2	60.9	44.1
	Desconocido	65.5	52.8	39.1	55.9
Hubo denuncia	Sí	56.2	59.9	45.8	38.8
	No	39.6	36.0	52.1	60.8
	No Sabe	4.3	4.2	2.1	0.4
Ante quién se interpuso la denuncia	Policía	98.8	96.5	90.5	95.5
	Fiscalía	0.2	2.0	4.8	1.1
	Procuraduría	-	-	-	1.1
	Otro	0.9	1.4	4.8	2.2
Respuesta obtenida	Resuelto	29.4	21.8	39.1	29.
	No Resuelto	45.6	49.9	39.1	51.6
	Pendiente	10.2	12.9	13.0	12.1
	No Sabe	14.9	15.4	8.7	6.6
Denuncia no realizada	Poca importancia	36.0	38.3	24.0	34.8
	Desconfianza	15.6	15.9	16.0	13.3
	Miedo al agresor	27.0	17.9	44.0	13.3
	Otra	21.5	27.9	16.0	38.5

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta «Comprendiendo la Violencia y la (In) Seguridad desde la Ciudadanía en Nicaragua».

La extorsión es un tipo de violencia directa contra la propiedad a la que hay que prestar atención, pues ha crecido vertiginosamente en países vecinos como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde el crimen

organizado y las Maras⁹ han cobrado mucho protagonismo. La extorsión es muy peligrosa, porque su práctica contra una misma víctima de parte de un mismo victimario se puede volver muy frecuente; dado que en la extorsión se vincula una relación entre tiempo y accionar de la persona que la ejerce.

De ahí que la extorsión es el tipo de violencia directa contra la propiedad, según conocimiento de casos, en la que los victimario son más conocidos (60.9%) por sus víctimas. Sucede lo contrario con otros tipos de violencia en la que es menos recurrente que el victimario y las víctimas sean los mismos. En cuanto a la victimización de la estafa, este tipo de violencia no tiene muchas diferencias entre hombres (48.9%) y mujeres (51.1%) ni por zona urbana (50.3%) ni rural (49.7%), pues lo que predomina es el nivel de ingresos y la edad, como se ve a continuación.

Uno de los factores determinantes para el ejercicio y la exposición a la violencia es la edad (*ver Cuadro 3.2.1.3*). En el caso de la victimización de violencia directa contra la propiedad, el tipo de violencia que más se presenta en el rango de edad de 16-25 años es el asalto (37.1%); en el rango de 26-35 años es la estafa (28.1%), la cual también es el tipo de violencia que más se presenta en el rango de 36-45 años (19.2%); para el rango de edad de 46-55 años se presenta mayormente la extorsión (58.5), de igual forma, este tipo de violencia es la que más se presenta en las personas mayores de 56 años. Al igual que la edad, la violencia directa contra la propiedad se comporta de manera diferenciada según el ingreso. Para el primer quintil, la violencia directa contra la propiedad que más se presenta es el hurto (23.52%), mientras que en el segundo es la extorsión (58.5%); de igual forma, la extorsión también es el tipo de violencia que más se expresa en el tercer quintil (32.3%), mientras que en el cuarto es más

⁹ Maras, término con el que se reconoce a las pandillas violentas.

recurrente la estafa (28.9%), y en el quinto, el asalto (32.9%).

Violencia directa contra las personas

Por otro lado, en el caso de la *violencia directa contra las personas* (ver Cuadros 3.2.1.2 y 3.2.1.5) se tiene más *conocimiento* de casos de maltrato físico (27.6%), seguido del homicidio (21.7%), amenaza (16.43%), maltrato psicológico (14.99%), violación sexual (13.88%), secuestro (4.8%), trata de personas (4.4%) y desaparición (4%). A nivel de *victimización*, el comportamiento de la violencia directa contra las personas es muy distinto al conocimiento de casos, pues los ciudadanos manifiestan ser mayormente víctimas de amenaza (2.7%), de maltrato psicológico (1.8%), de maltrato físico (1.4%), de violación sexual (0.3%), de secuestro (0.3%), de homicidio (0.3%), de desaparición (0.3%), y de trata de personas (0.12%)¹⁰.

Cuadro 3.2.1.5: Orden de conocimiento y victimización según violencia directa contra las personas.

Orden	Conocimiento	Victimización
1	Maltrato físico	Amenaza
2	Homicidio	Maltrato psicológico
3	Amenaza	Maltrato físico
4	Maltrato psicológico	Violación sexual
5	Violación sexual	Homicidio
6	Secuestro	Secuestro
7	Desaparición	Desaparición

Fuente: *Elaboración propia a partir de la encuesta «Comprendiendo la Violencia y la (In) Seguridad desde la Ciudadanía en Nicaragua».*

¹⁰ Para los casos de homicidios y de desaparición, se hace referencia a victimización secundaria. En relación con la trata de personas, se menciona en términos generales, porque una inferencia desagregada requiere de una metodología especializada.

Como se puede observar, las diferencias son muy marcadas entre el conocimiento de casos de violencia directa contra las personas y la victimización de estos tipos de violencia. En primer lugar, porque las *brechas* entre conocimiento y victimización de violencia directa contra las personas son muy amplias; ejemplo de ello es el maltrato físico, pues tiene una brecha de 23.21%, porque el conocimiento (24.64%) de casos de maltrato físico es ampliamente mayor a la victimización (1.43%). En segundo lugar, por el orden de mayor conocimiento (*ver Cuadro 3.2.1.5*), hay expresiones de violencia directa contra las personas, de las que los ciudadanos conocen más casos, a pesar de que su victimización es menor; tal es el caso del homicidio, que es el segundo tipo de violencia directa contra las personas del cual los ciudadanos conocen más casos, sin embargo, es el quinto según la victimización. Por otro lado, hay formas de violencia directa contra las personas, como el maltrato psicológico, que se invisibiliza, pues es el cuarto de los tipos de violencia directa contra las personas que más se conocen, cuando es el segundo en victimización.

Los tipos de violencia directa contra las personas que presentan mayor victimización para las mujeres (*ver cuadros 3.2.1.6 y 3.2.1.7*) en comparación con los hombres, son la violación sexual (100%) y el maltrato psicológico (88.4%). En cambio, los hombres presentan mayor victimización que las mujeres en el maltrato físico (72.4%), seguido de la desaparición (67.9%), secuestro (61.2%), homicidio (59.7) y amenaza (53.3%).

El comportamiento diferenciado de la violencia directa contra las personas, según sexo, se debe a que este tipo de violencia no es instrumental como sucede con la violencia directa contra la propiedad. En este sentido, el objetivo de la violencia directa contra las personas es la persona misma, no un bien material como en la violencia directa contra la propiedad. La violencia directa contra las personas está marcada por relaciones de poder, ima-

ginarios y prácticas, que son producidas y reproducidas por el machismo como expresión cultural y estructural del patriarcado. Que las mujeres sean las principales víctimas de violación sexual se debe a que históricamente han existido una cultura de tolerancia y un régimen de impunidad ante este tipo de violencia deshumanizante que lesiona los múltiples derechos de las mujeres (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Ipas y Movimiento Autónomo de Mujeres, 2013).

Cuadro 3.2.1.6: Orden de victimización según sexo (hombre y mujer) y zona (urbano y rural).

Orden	Hombre	Mujer	Urbano	Rural
1	Maltrato físico	Violación sexual	Secuestro	Homicidio
2	Desaparición	Maltrato psicológico	Violación sexual	Desaparición
3	Secuestro	Amenaza	Maltrato físico	Amenaza
4	Homicidio	Homicidio	Maltrato psicológico	Maltrato psicológico
5	Amenaza	Secuestro	Amenaza	Maltrato físico
6	Maltrato psicológico	Desaparición	Desaparición	Violación sexual
7	Violación sexual	Maltrato físico	Homicidio	Secuestro

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta «Comprendiendo la Violencia y la (In) Seguridad desde la Ciudadanía en Nicaragua».

De igual forma, las mujeres son, en su mayoría, víctimas de maltrato psicológico, porque es un mecanismo de control ejercido por los hombres en el ámbito de pareja, familiar y hasta laboral. Esto último está asociado con lo planteado por Morrison, Buvinic y Shifter (2005), sobre la violencia doméstica (violencia psicológica, física y sexual), pues la padecen con mayor frecuencia las mujeres. A su

vez, la violencia contra los hombres también se explica por el machismo, porque mayoritariamente estos son victimarios y víctimas de maltrato físico, de desaparición, de homicidio y de amenaza, debido al modelo predominante de masculinidad, que estipula que los conflictos entre hombres deben resolverse de manera violenta. Además, los hombres son, por lo general, víctimas de secuestro, porque el móvil de este es la obtención de recursos económicos, los cuales pertenecen en su mayoría a los hombres.

Cuadro 3.2.1.7: Perfil del tipo de violencia según victimización,
continuación.
(en porcentajes)

		1	2	3	4	5	6	7
Sexo	Hombre	53.3	72.4	11.6	-	61.2	67.9	59.7
	Mujer	46.7	27.6	88.4	100.0	38.8	32.1	40.3
Área	Urbano	42.1	58.7	49.5	65.2	69.8	33.6	13.7
	Rural	57.9	41.3	50.5	34.8	30.2	66.4	86.3
Quintil de Ingresos	1er	15.0	6.7	5.0	11.9	-	51.6	13.3
	2do	28.2	17.9	33.2	23.7	-	14.9	73.0
	3ro	11.3	29.1	20.7	36.4	-	-	-
	4to	25.3	6.9	21.2	28.0	50.4	-	13.7
	5to	20.1	39.4	19.8	-	49.6	33.6	0.0
Edad	16-25	19.8	42.7	28.1	25.3	-	-	13.3
	26-35	31.6	28.5	20.0	-	-	-	30.0
	36-45	14.5	6.9	15.6	46.7	-	-	-
	46-55	7.9	13.9	28.1	28.0	38.8	49.3	43.0
	56 +...	26.2	8.0	8.2	-	61.2	50.7	13.7

Nota: 1, Amenaza; 2, Maltrato físico; 3, Maltrato psicológico; 4, Violación sexual; 5, Secuestro; 6, Desaparición; 7, Homicidio

Fuente: *Elaboración propia a partir de la encuesta «Comprendiendo la Violencia y la (In) Seguridad desde la Ciudadanía en Nicaragua».*

En el caso de la victimización por violencia directa contra las personas según zona, el área rural presenta mayor victimización en comparación con la urbana, en el homicidio (86.3%), seguido por la desaparición (66.4%) y por la amenaza (57.9%). En cambio, la zona urbana presenta mayor victimización con respecto a la zona rural en el secuestro (69.8%), la violación sexual (65.2%) y el maltrato físico (58.7%). Es probable que los homicidios, desapariciones y amenazas se presenten mayoritariamente en el campo, porque detrás de estas acciones yace el fenómeno de la venganza, y de la legitimación de ciertas formas de violencia; un ejemplo de ello es el homicidio en defensa de un patrimonio o del “honor personal o familiar”.

Cuadro 3.2.1.8: Violencia en el trabajo en las tres principales actividades económicas (en porcentaje)

	Comercio al por mayor y al por menor	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	Industria manufacturera	Todas las actividades económicas
Violencia física ¹	2.6	2.6	2.1	2.9
Violencia física ²	7.2	3.2	3.7	5.3
Violencia física ³	9.3	5.5	10.1	7.4
Violencia sexual ⁴	1.3	0.4	2.1	1.3
Violencia psicológica ⁵	4.5	11.4	19.1	8.6

Nota: ¹Cometida por compañeros de trabajo. ²Cometida por personas relacionadas al trabajo. ³Cometida por delincuentes. ⁴Acoso o abuso. Acoso laboral.

Fuente: Aragón & López (2013)

Además, puede que los homicidios, las desapariciones y las amenazas predominen en la zona rural, porque las

instituciones estatales tienen menor presencia en estos lugares, lo que permite que estas expresiones de violencia se conviertan en otra forma de resolución de conflictos ajena a las normadas por el Estado. Por otro lado, el tipo de violencia directa contra las personas que no presenta mucha diferencia entre la zona rural (50.4%) y la zona urbana (49.5%) es el maltrato psicológico, pues el factor predominante en este tipo de violencia es el sexo como ya se explicó.

Continuando con la violencia directa contra las personas, el tipo de violencia en la que el victimario es más conocido (*ver Cuadro 3.2.1.9*) por las víctimas, según conocimiento de casos, es el maltrato psicológico (90%), seguido de amenazas (79.4%), de violación sexual (75.9%), del maltrato físico (74.9%) y del homicidio¹¹ (66.2%). En estos tipos de violencia, los victimarios son más conocidos por las víctimas, porque se ejercen en ambientes cercanos como la familia y el trabajo. Sobre esto (*ver Cuadro 3.2.1.8*), según Aragón y López (2013), el 8.6% de los trabajadores manifiestan ser víctimas de violencia psicológica en su lugar de trabajo, siendo la industria manufacturera (19.1%) el sector donde predomina este tipo de violencia. Un ejemplo de esto son las maquilas, donde según un estudio de López, Blanco, Aragón y Partanen (2008), el 49% de las mujeres expresan haber sufrido violencia verbal o presión psicológica.

Por otro lado, el tipo de violencia directa contra las personas en la que los victimarios son más desconocidos (*ver Cuadro 3.2.1.9*), según el conocimiento de casos, son el secuestro (70.4%) y la desaparición (56.8%). Esto se explica porque el secuestro, como se mencionó, tiene como móvil la obtención de recursos económicos, para cuyo usufructo se necesita que la identidad del victimario no se conozca. De igual forma, en el caso de la desaparición,

¹¹ Victimización secundaria, en este caso homicidio de un miembro del hogar.

el desconocimiento de los victimarios es un factor clave para que este tipo de casos no sean esclarecidos y judicializados.

Cuadro 3.2.1.9: Perfil del victimario según violencia
(en porcentajes)

		1	2	3	4	5	6	7
Victima- rio	Conocido	79.4	74.9	90.1	75.9	29.6	43.2	66.2
	Desconoci- do	20.6	25.1	9.9	24.1	70.4	56.8	33.8
Hubo denuncia	Si	50.8	49.5	33.7	78.9	75.0	61.3	86.0
	No	47.2	48.1	64.2	20.2	22.4	28.0	11.9
	No Sabe	2.0	2.3	2.0	0.9	2.6	10.7	2.1
Ante quién se interpu- so la denuncia	Policía	93.7	95.7	78.3	95.4	98.2	95.7	97.2
	Fiscalía	3.2	1.9	4.8	1.1	0.0	2.2	1.0
	Procuradu- ría	0.8	0.5	6.0	2.3	0.0	0.0	0.3
	Otro	2.4	1.9	10.8	1.1	1.8	2.2	1.4
Respues- ta obtenida	Resuelto	27.5	38.8	39.8	57.3	46.6	23.9	39.3
	No Resuel- to	44.3	39.3	30.7	23.0	29.3	37.0	33.2
	Pendiente	21.4	13.1	21.6	12.4	8.6	23.9	14.8
	No Sabe	6.9	8.9	8.0	7.3	15.5	15.2	12.8
Denun- cia no realizada	Poca im- portancia	32.5	48.7	33.3	17.5	7.7	47.6	35.3
	Descon- fianza	12.3	6.8	19.6	5.0	30.8	14.3	2.9
	Miedo al agresor	40.4	18.3	26.8	50.0	23.1	19.0	20.6
	Otra	14.9	26.2	20.3	27.5	38.5	19.0	41.2

Nota: 1, Amenaza; 2, Maltrato físico; 3, Maltrato psicológico; 4, Violación sexual; 5, Secuestro; 6, Desaparición; 7, Homicidio.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta « Comprendiendo la Violencia y la (In) Seguridad desde la Ciudadanía en Nicaragua».

Anotaciones finales sobre la violencia directa contra la propiedad y las personas

Como se pudo observar, las formas de violencia directa contra la propiedad y las personas que más reconocen haber sufrido o conocido la ciudadanía, son las que se ejercen a través de comportamientos cotidianos aprendi-

dos socialmente a partir de modelos de conductas o de patrones de crianza. En cambio, las formas de violencia de naturaleza criminal o que requieren una forma organizada de ejercerla son las que menos afectan a la ciudadanía. Según Morrison, Buvinic y Shifter (2005), las primeras formas de violencia se denominan violencia emocional y las segundas violencia instrumental. La violencia instrumental se diferencia de la violencia emocional, porque se ejerce como medio para obtener un propósito, y porque sus impactos o sus consecuencias son más letales. De igual forma, la violencia instrumental en algunas ocasiones persigue fines criminales o políticos, como se aborda en el apartado de violencia política.

Por último, las diferencias cuantitativas entre conocimiento de casos de violencia y victimización se deben a la repercusión que tienen ciertos tipos de violencia en comparación con otros. Tal es el caso de los homicidios, que son formas de violencia con mayor impacto social, y con una difusión más rápida y extendida entre la población. No sucede así con otras formas de violencia, como el maltrato psicológico, que muchas veces no se conoce más allá de los círculos íntimos de la víctima o se percibe como una práctica social relativamente aceptable. Al respecto, Huhn, Pettz y Oetler (2007) argumentan que la relación entre percepción de violencia y victimización no es directamente proporcional, porque en general la violencia es una construcción social que depende mucho de los contextos donde se realiza.

En este sentido, lugares con altos niveles de victimización pueden tener una baja percepción de violencia, ello se puede explicar en ciertas sociedades donde la cultura o la recurrencia de estos eventos lo normalicen, invisibilicen o legitimen. En cambio, hay lugares con relativa baja victimización que, sin embargo, tienen una alta percepción, lo cual muchas veces se explica por la poca tolerancia que tienen ciertas sociedades, o porque hay una exacerbación de estos eventos por actores interesa-

dos en que así sea, como pueden ser agrupaciones políticas y medios de comunicación, entre otros. En esta línea, muchos autores mencionan que las percepciones sobre la violencia han sido instrumentalizadas por grupos de poder, para ejercer mayor control social, o ganar la simpatía o aprobación de políticas de corte represivo (mano dura, súper mano dura, en Honduras, en El Salvador y en Guatemala). De ahí, la importancia de estudiar la incidencia de los actores políticos y de los medios de comunicación en las percepciones de la violencia directa contra la propiedad y las personas. Dicho esto, en el próximo apartado se reflexionará sobre la violencia cultural y la violencia política.

3.2.2 Violencia Cultural y estructural

Uno de los propósitos de esta investigación fue explorar el grado de conocimiento que los ciudadanos tenían sobre la violencia cultural y estructural. En relación con la primera --violencia cultural--, se exploraron los imaginarios sociales sobre la discriminación y la pobreza. En el caso de la violencia estructural, se consideraron algunas formas de violencia presentes en la relación entre Estado y ciudadanía, unas de carácter coyuntural y otras más arraigadas, en especial, las no institucionalizadas formalmente.

La discriminación y la pobreza como formas de violencia

Se ha definido la discriminación como un fenómeno social que se gesta y se manifiesta a través de usos y de prácticas sociales entre personas y grupos, cuya esencia es el desprecio contra una persona o un grupo social, basado en prejuicios que tienen por efecto lesionar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez, 2006), por tanto, representan una clara forma de violencia.

Analizando la opinión de los ciudadanos nicaragüenses, el 88.01% considera que la discriminación es una forma

de violencia, en contraposición al 11.09% que afirma lo contrario. Se trata de un alto porcentaje que identifica dicha práctica social con ese fenómeno. Los que identifican la discriminación como una forma de violencia, argumentan que niega la igualdad de derechos (42.36%) y el derecho a ser diferente (23.75%), también porque es una forma de injusticia (19.82%), y algunos la asocian con la omisión o ineficacia del Estado ante sus obligaciones (8.14%). En cambio, los que no consideran la discriminación como una forma de violencia, apelan al discurso de que “las cosas siempre han sido así” (44.98%), por tanto, es normal que se discrimine; otros la justifican aduciendo que no hay recursos (18.51%) ni oportunidades para todos (12.71%), y, finalmente, se dice que unos son mejores que otros y, por tanto, se privilegian (13.49%). En la posición del segundo grupo, se observa una visión naturalizada o justificada de la discriminación, lo que representa claramente una forma de violencia cultural materializada en discursos o en visiones que legitiman una práctica social que afecta o niega la igualdad de oportunidades y de derechos.

Cuando se indaga sobre el ejercicio de la discriminación en su comunidad o barrio, el 56% de las personas reconocen la existencia de esta práctica, frente a un 44% que no la reconoce. Del total de personas que reconocieron la existencia de la discriminación en su comunidad o barrio, el 21.06% admitió que la principal forma de discriminación era por ideología política, seguido por la filiación religiosa (14.17%), por las preferencias sexuales (13.96%), por etnia (7.09%), por ser mujer (3.61%) y por ser joven (2.94%).

Al relacionar estos datos con la información cualitativa, algunos participantes de los grupos focales manifestaron haber sido víctimas de discriminación, a su juicio, por razones políticas:

En el caso de las comunidades, en las que nosotras trabajamos, hay violencia política porque [...] los famosos Gabinetes de la Familia, [nos] excluyen de proyectos o de beneficios [...] para mí esto es ya una violencia institucionalizada que viene desde el Gobierno central (comunicación a través de grupo focal en Estelí).

Esta discriminación o privación de ciertos derechos desemboca en acciones directas de violencia política a ciertos colectivos u organizaciones de la Sociedad Civil, como lo manifiesta una integrante de una organización de mujeres:

La red de mujeres de Matagalpa tomó la decisión de no pedir permiso a la Policía cuando hacemos actos públicos, [...] porque siempre nos los niegan. Nos han obligado a quitar toldos, hemos sido reprimidas, [...] hemos visto que hay organizaciones que son aliadas del Gobierno y que hacen todas las cosas a vista y antojo de la gente y de las autoridades (comunicación directa con participante de grupo focal en Matagalpa).

Este tipo de situaciones se debe a que, según Falisse y Quintana (2012), “existen tensiones en la forma de ejercer el poder político y la participación de la población” (p.31), pues se ha dado una progresiva centralización del poder combinada con la conformación de secciones desconcentradas del partido, como los Gabinetes de Familia¹²a nivel de bases. Este proceso se inició con la reforma y con la implementación de la *Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290)* por medio del *Decreto Presidencial No. 03-2007*, que reconfiguró el diseño de los espacios de participación ciudadana del país (Stuart, 2010), a través de los Consejos del Poder Ciuda-

¹²Los Gabinetes de Familia tiene como origen a los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano.

dano, en una relativa reducción de los avances y logros establecido en la *Ley de Participación Ciudadana o Ley 475* y sus correspondientes reformas del año 2005. Estas leyes centralizaron desde el Ejecutivo la ejecución de programas sociales y planes de desarrollo, e incluso el trabajo de las instituciones del Gobierno.

Este nuevo modelo ha mostrado sesgos políticos, y en algunos contextos se ha constituido en una forma de clientelismo con consecuencias negativas o efectos socialmente no deseados. Como bien señala Serra (2011), se ha afectado el principio de pluralidad de la participación al crear una instancia paralela a los mecanismos legalmente establecidos, o bien saturando y controlando los espacios con miembros de confianza o de afinidad político-partidaria. De esta forma, el Estado “reivindica no solamente el control de su esfera y de los instrumentos ligados a su funcionamiento [...], sino que también reivindica ser parte de la sociedad civil, hasta *ser toda la sociedad civil*” (Falisse y Quintana, 2012, pp.31-33, cursiva propia), excluyendo a las otras organizaciones que no están ligadas al partido y al Gobierno.

Una consecuencia de esta dinámica es el cierre de espacios de trabajo a algunas organizaciones que, según la opinión de sus miembros, son consideradas “opositoras”. Sobre esto, organizaciones que trabajan sobre educación sexual en los colegios plantean dificultades de coordinación con el Ministerio de Educación, porque a su juicio, “si sos parte de una organización, una ONG, no [te] dan permiso, porque dicen que las ONG están en contra del Gobierno” (comunicación directa con líder de Chinandega). Este cierre de espacios no permite el desarrollo de trabajo conjunto entre organizaciones y Estado, que propicie mayor cobertura e impacto de este tipo de actividades preventivas.

Es importante tener en perspectiva que las tensiones o posiciones encontradas entre determinadas organizacio-

nes de mujeres, y el actual Gobierno hunde sus raíces en torno a una serie de políticas que se han venido implementando¹³. Estas contradicciones también se han debido al desempeño del Poder Judicial y de otras instituciones públicas como la Policía¹⁴, ante la situación de impunidad en casos de violencia sexual contra las mujeres, la problemática del aborto terapéutico y la violencia contra las mujeres en general. La violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Nicaragua ha trascendido de tal manera, que la directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, exhortó en 2010 a los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y señaló que:

La prohibición del aborto en Nicaragua es resultado de una ley escandalosa y draconiana que obliga a las víctimas de una violación y de un incesto a llevar a término su embarazo, y está causando un aumento de las muertes maternas [...] Los Estados Miembros de la ONU deben aprovechar esta oportunidad para hacer que Nicaragua rinda cuentas de una ley que viola los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la dignidad (párr. 4).

Cuatro años más tarde, Amnistía Internacional (2014) vuelve a pronunciarse categóricamente sobre esta grave situación, y ante la negativa del Gobierno de Nicaragua en asumir las recomendaciones formuladas por expertos de la ONU y de dicho organismos de Derechos Humanos:

Lamenta [mos] profundamente que durante el último examen periódico Nicaragua rechazase las recomendaciones de derogar la prohibición total

¹³Como la penalización del aborto terapéutico, la Ley 779 y el Código de la Familia, entre otros.

¹⁴A pesar que han desarrollado serios esfuerzos a través de las Comisarías de la Mujer y otras iniciativas coordinadas con la sociedad civil.

del aborto. Esta prohibición es una de las más extremas del mundo [...] [y] contraviene las recomendaciones hechas por cinco comités de expertos de la ONU, entre ellos el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño. La labor de investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional desde el último examen periódico [2014] de Nicaragua, muestra que la prohibición total del aborto está teniendo efectos crueles en las mujeres y las niñas, sobre todo en aquellas cuya vida o salud corre peligro en caso de continuar con el embarazo, y en quienes se quedan embarazadas a consecuencia de una violación. Dado los elevados niveles de violencia sexual ejercida contra las mujeres y las niñas en el país, es especialmente preocupante que no se les dé a las sobrevivientes ninguna opción sobre cómo gestionar las consecuencias de una violación (párr. 10).

El otro punto de tensión o conflictividad entre organizaciones de mujeres, muy relacionado con lo anterior, es el problema de la impunidad de la violencia contra las mujeres por la subestimación de las denuncias, lo que ocasiona desconfianza e ineficacia del sistema judicial y de la Policía (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Ipas y Movimiento Autónomo de Mujeres, 2013). Estas observaciones han sido presentadas en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2013. En el informe de las organizaciones peticionarias de esta audiencia temática, se señalan las dificultades que aún subyacen en los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres implementados por el Estado de Nicaragua, como la Ley 779. En un informe presentado por la presidenta del Corte Suprema de Justicia, se señala que en los primeros cien días de vigencia de dicha ley, se recibieron 1,834 denuncias (equivalentes a 18 denuncia por día), de las cuales solo se ha tenido sentencia de un 15.48%, de ellas,

el 5.72% fueron resoluciones absolutorias y 9.76% condenatorias (Prado, 2012). A juicio de estas organizaciones, “esto evidencia los esfuerzos que aún están pendientes de realizar para lograr que la ley sea aplicada de acuerdo con el espíritu de su creación, sus objetivos y sus principios rectores” (CEJIL, Ipas y MAM, 2013, p. 4).

Otro ámbito en el que se resiente la discriminación es en el de las oportunidades laborales y su estabilidad en el sector público, pues como afirma uno de los participantes de los grupos focales, “ahora vos no podés trabajar en institución del Gobierno si no llevás tu aval político” (comunicación personal con participante de grupo focal en Estelí). También se ha señalado el carácter obligatorio que tienen algunas actividades partidarias promovidas por el Gobierno para los trabajadores del sector público. Al respecto, otro participante de los grupos focales, en Managua, plantea los elementos sensibles que se combinan en estas dinámicas:

Ahí se conjugan otras cosas, el tema del trabajo y del dinero. Si no vas a las rotondas [...] te están presionando tu derecho al trabajo, y hay cinco o diez personas detrás de vos esperando para ese puesto. Es bien complicado el asunto, puede ser que la gente asuma que no es correcto y no quiere, pero se subordina (comunicación personal con miembro de grupo focal en Managua)

Sobre lo anterior, Robin (2009) señala que las sanciones en el lugar de trabajo son otros de los medios a través de los cuales se ejerce el miedo político como mecanismo de control. En resumidas cuentas, hay un claro reconocimiento por parte de la población (88%) de que la discriminación es una forma de violencia, y un poco menos de la mitad (44%) manifiesta la comisión de esta práctica social en su comunidad o en su barrio. Como se ha señalado, la forma de discriminación más resentida por la ciudadanía es la que se basa en razones políticas

(21.06%), que a juicio de algunos miembros de los grupos focales también se ejerce en la forma como se beneficia o excluye a la población de los programas sociales del Gobierno; así como el cierre de espacio de trabajo en el sector público, la negación de derechos a la protesta o a la manifestación pacífica. Aunque no se profundizó en la discriminación como forma de violencia política, es necesario reflexionar y estudiar más sobre sus prácticas y sus consecuencias, tanto objetivas como subjetivas, en contextos de democracia en construcción.

La pobreza como forma de violencia según la percepción ciudadana

Luego de haber analizado la discriminación como una expresión de violencia, se indagó si la pobreza constituía una forma de violencia, y solo el 32.70% la identificó de esta manera, en contraposición al 67.30% que afirmó que la pobreza no es una forma de violencia. De los ciudadanos que perciben la pobreza como una forma de violencia, la mayor parte aduce que es así porque no hay empleo (49.15%), luego que se debe a la precariedad de los salarios (41.92%), también porque margina a las personas (21.94%), por el hecho que la pobreza no permite cubrir las necesidades básicas (20.98%), así como por la falta de oportunidades en educación (19.45%), porque el Estado favorece a unos pocos (18.66%) y porque la pobreza es producto de la riqueza de otros (16.90%).

En cambio, de los que perciben que la pobreza no es una forma de violencia, la mayoría planteó que es así porque cada quien es responsable de su situación (67.11%), otros argumentan que los pobres son haraganes (11.79%), también hay quienes adujeron que Dios lo quiere así (11.15%), los pobres no son emprendedores (7.52%) y porque los pobres no estudian (3.28%). Al conjunto de las razones de los ciudadanos que no relacionan la pobreza con la violencia, subyace el imaginario de que esta “es una situación originada en los atributos de la gente pobre”

(Serra, 2011, p. 16) o incluso algo deseado por Dios, que contribuye a una normalización o justificación de este problema multicausal.

Esto constituye una forma de violencia cultural desde la perspectiva subjetiva, dado que legitima una realidad objetiva que no es más que una forma de violencia estructural. Analizado el fenómeno de la discriminación y de la pobreza como formas de violencia cultural y con elementos estructurales, se trabajará en el siguiente apartado las distintas formas de violencia estructural, que a juicio de la población afectan a la sociedad nicaragüense, como la violencia política, la negación de derechos, situaciones de represión, y la intensificación de dinámicas económicas excluyentes que impactan en los derechos de las comunidades, entre otras.

Violencia Estructural

En Nicaragua, como en muchos países de Latinoamérica, la violencia política se remonta al origen del Estado Nación, en el que ha prevalecido una forma de violencia de corte instrumental, asumida como un recurso más al servicio de la obtención de fines políticos, cuyos actores han procedido bajo la lógica de cálculos y de estrategias (Oberschall 1973, Wieviorka 1992, Tilly 1998 citados en Ortiz, 2012). Como se ha señalado, las transiciones democráticas no han podido erradicar prácticas autoritarias que siguen presentes en el Estado y la sociedad (O'Donnell, 2011; Rivera, 2009; Pinheiro, 2002).

En general, según el conocimiento de la violencia directa con motivaciones políticas, la más frecuente es la intimidación (12.5%), seguida por la represión (9.7%), detención (7.7%) y tortura (3.3%). Las acciones violentas con motivaciones políticas que más se ejercen son las menos graves, y, por consiguiente, implican bajo costo político por parte de sus ejecutores. Según Robin (2009), las acciones de intimidación son un mecanismo que puede ser ejercido

por múltiples actores, tanto de forma vertical como horizontal, y con múltiples propósitos: evitar u obligar la realización de determinadas acciones de forma directa o indirecta a través de mecanismos ejemplarizantes, que consisten en sancionar o reprimir a una persona con el objetivo de dar un mensaje al resto de las personas en su contexto.

Ahora bien, analizando la victimización de la violencia directa con motivaciones políticas, se observa el mismo comportamiento en una proporción menor, pues la intimidación (1.8%) es la práctica más recurrente de este tipo de violencia, seguida de la represión (0.9%) y de la detención (0.3%)¹⁵. Se ha señalado que la violencia política está relacionada con la forma de “hacer política” de los distintos actores. Al respecto, una entrevistada afirma que:

Hay dos aspectos que son como la raíz del problema. Uno es el *estilo de gobierno* [...] y lo otro es la *cultura de dominación*. Cuando ejercemos una cultura política dominante no permitimos que nadie piense diferente a nosotros y [lo] avasallamos [...]. Entonces ese estilo de cultura política dominante nos afecta a toda la sociedad y es una afectación silenciosa [...] porque nadie quiere quemarse¹⁶ y hablar este tipo de cosas (comunicación personal con mujer en grupo focal de Matagalpa).

En algunos casos, aunque se tenga conciencia de este tipo de abusos de poder, se teme abordar abiertamente esta situación por el miedo a sufrir represalias. A esto último, Robin (2009) denomina *miedo político*, que es el que se incrusta en “la base de nuestra vida pública”, y tiene por objetivo que los ciudadanos se rehúsen a “ver

¹⁵En el caso de la tortura por motivaciones políticas, no se recabó ningún dato sobre este tipo de violencia.

¹⁶ “Quemarse” significa delatarse.

las injusticias y las controversias subyacentes [...] que hacen de este miedo un instrumento de dominio y avance político". (p. 17)

Otra expresión de la violencia política ha sido la negación de ciertos derechos. En algunos territorios se señala la falta de acceso a la información pública, así como arbitrariedades en el proceso de cedulação, y en acciones de represión ante protestas y movilizaciones pacíficas. En relación con la negación del derecho a la información pública se ha excluido a medios de comunicación que no son afines al gobierno, así como a organizaciones de la Sociedad Civil, y a centros de investigación que hacen uso de esta información. Sobre esto, un ciudadano comenta:

Soy periodista [con] más de 25 años de ejercer el periodismo. La ciudadanía [...] en general no está recibiendo información, porque se le está negando el derecho a ser informada. No todos los periodistas somos invitados a las actividades del Gobierno [...] porque hay una lista del Consejo de Gobierno en la que no aparecemos (comunicación personal con mujer participante en grupo focal de Matagalpa).

Esta misma fuente manifestó que mucha de la información que se les niega por parte de las instituciones de Gobierno impide que los medios de comunicación y otras organizaciones contribuyan a la prevención o a la solución de problemas que afectan a la población. Con relación al acceso a la información pública, el periodista británico Glen Greenwald (2014) ha formulado una profunda reflexión sobre la paradójica tendencia de algunos gobiernos, por un lado a la excesiva vigilancia masiva de sus ciudadanos, y por otro el infranqueable hermetismo y control de la información de carácter público, como un problema que tiene serias implicaciones para la democracia y las garantías de sus derechos ciudadanos:

El secretismo crea un espejo unidireccional: el gobierno ve lo que hace todo el mundo incluida su propia población y nadie ve las acciones del gobierno. Es el desequilibrio supremo, el que permite la más peligrosa de las circunstancias humana: el ejercicio de un poder ilimitado sin transparencia ni rendición de cuentas (p. 212).

Otro de los derechos negados, han sido las condiciones necesarias para el ejercicio del sufragio en las elecciones pasadas. Concretamente en municipios donde históricamente el electorado ha tenido una preferencia distinta al partido en el Gobierno: San Fernando, Ciudad Antigua y Ciudad Darío, entre otros. Sobre esta problemática, una ciudadana manifestó:

El problema se da cuando nosotros comenzamos a reclamar la cédula. Comenzamos a organizar a toda la comunidad [...], hicimos el paro en el empalme para exigirles la entrega de cédulas, y se corrían los rumores de que nosotros estábamos atentando, que teníamos armas, que éramos grupos armados, porque la mayoría de la gente de Ciudad Antigua participó en la “Contra” en los años 80. Hicieron una cacería de personas y comenzaron a buscar debajo de las camas para ver si había armas (comunicación personal con mujer de grupo focal de Ciudad Antigua).

Esto refleja un excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades y una criminalización de la protesta social. Además, se observan ciertos resabios del conflicto armado que provocan desconfianza y estigmatización mutua entre los antiguos adversarios políticos, a pesar de los años y del proceso de pacificación. Muchas de las expresiones de situaciones altamente violentas están relacionadas con conflictos políticos no resueltos adecuadamente entre los actores. En esta línea, Orozco

(2014) afirma que a pesar de que “somos un país con criminalidad social muy baja [...] somos un país muy violento en términos políticos. Incluso, cuando uno revisa la historia, ve que la tasa de homicidios se eleva en Nicaragua, cuando el país está agitado políticamente” (p. 17) (*ver Gráfico 1.2.1*).

En estos escenarios, según Tilly (1985), la violencia política se puede dar entre las mismas bases sociales. Como ha sido recurrente en Nicaragua, en los períodos electorales se intensifica la violencia política entre los distintos actores políticos, muchas veces alimentada por las falencias e irregularidades del sistema electoral, que han generado un clima de desconfianza. Históricamente, las elecciones han sido una constante fuente de conflicto y de violencia política como lo señala Esgueva (2011). Ejemplo de ello fueron las elecciones de 1996, y, recientemente, los comicios municipales de 2008 y de 2012. Sobre esto, Amnistía Internacional (2014) ha manifestado su preocupación al Gobierno de Nicaragua, sobre el clima de violencia política y de abusos por parte de instituciones del Ministerio Público en las elecciones de 2012:

Las continuas acusaciones de fraude electoral desembocaron en enfrentamientos entre simpatizantes del [...] Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y seguidores del [...] Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nueva Guinea, Región Autónoma del Atlántico Sur. Organizaciones de derechos humanos informaron que la policía detuvo y maltrató bajo custodia a simpatizantes del PLC. Hay detenidos que denuncian haber sido golpeados, y mujeres y niñas detenidas afirman que las obligaron a desnudarse en frente de agentes varones, que las humillaron y las amenazaron con someterlas a violencia sexual. (p. 6).

Según este organismo, hasta la fecha no se conoce ninguna investigación sobre esta grave situación de

violación contra los Derechos Humanos y sus respectivos procedimientos de determinación de responsabilidad, sanción y resarcimiento. Tampoco se conoce de alguna réplica o de esclarecimiento por parte del Gobierno.

Excurso: Casos de violencia política según informe del CENIDH 2014

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, (2014a), de 2007 a 2013 se reportaron 74 casos de muertes ocasionadas por entes del Estado: 27 por actuación policial o cuando las víctimas estaban en prisión preventiva, 7 por el Ejército, 10 por acciones conjunta del Ejército y la Policía, y 10 por el Sistema Penitenciario. De estas muertes 26 quedaron en la impunidad, en cinco se reportaron sanciones, y del resto no se cuenta con información. En estos acontecimientos la violencia del Estado se manifestó en la desproporcionalidad en el uso de la fuerza y en ejecuciones sumarias.

De igual forma, en estos sucesos las investigaciones y los procesos judiciales fueron deficientes, pues no se preservó la escena del crimen ni se exhumó cuerpos cuando era necesario hacerlo. Además, hubo mala representación de las víctimas por parte del Ministerio Público, y una masiva presencia de la Policía durante los juicios, lo cual según el CENIDH fue intimidatorio para las víctimas y para los miembros del jurado.

Los casos más emblemáticos en este período se dieron en torno a las elecciones. Tal es el caso del asesinato de tres miembros de una familia en la comarca El Carrizo, departamento de Madriz, después de las elecciones presidenciales de 2011; el asesinato del secretario político del FSLN en Coperna, y el asesinato de dos pobladores de Ciudad Darío en las elecciones municipales de 2012. En el caso de la muerte del secretario político del FSLN en Coperna y de los dos simpatizantes liberales de Ciudad Darío no hubo condenados, mientras que en el caso de El Carrizo los policías implicados recibieron penas bajas y luego fueron liberados.

Estos datos nos muestran algunas manifestaciones de violencia política que se han dado en los últimos años.

Según la opinión de ciudadanos y de organismos de Derechos Humanos, la violencia política sigue siendo un problema y un desafío de la sociedad nicaragüense, y si no se revierten los detonantes de esta violencia podrían comprometer las condiciones actuales de la democracia. En esta línea, Greenwald (2014) sostiene que el verdadero grado de la libertad de una sociedad se refleja en el modo cómo los gobiernos tratan a sus disidentes y otros grupos marginados, y no tanto en la forma de tratar a los partidarios del régimen, además advierte la visión polarizada que se puede tener en un contexto represivo o autoritario:

“quienes no muestran oposición no son objeto casi nunca de medidas represoras, y en su fuero interno, pueden convencerse así mismo de que la represión no existe realmente. [...] Incluso en las peores tiranías del mundo, los adeptos están a salvo de los abusos del poder estatal. (244)

Desde esta perspectiva, es importante comprender y transformar la compleja consustancialidad entre democracia, conflicto y violencia política, a fin de sacar lecciones para la construcción de una paz sostenible.

Negación de derechos

A medida que se han ido analizando las distintas expresiones de violencia cultural y estructural en los discursos de los actores entrevistados, se ha observado en algunos casos, la negación del derecho a la movilización o protesta pacífica por parte de instancias del Estado; lo que constituye la violación a un derecho constitucional de la ciudadanía. Esta situación ha sido históricamente una constante y recurrente forma de violencia política ejercida por los distintos gobiernos en contextos de dictadura, regímenes autoritarios y democracias postransicionales

consolidadas. Desafortunadamente, esta práctica aún pervive.

En el actual contexto, y tomando en consideración las opiniones de los entrevistados e informes sobre Derechos Humanos, se observa que la voluntad coactiva del Gobierno ha sido selectiva, y combina estrategias de anticipación a través de acciones preventivas y amenazas, así como mecanismos de respuestas por medio de represalias ante las protestas y movilización (Tilly, 2006). Este comportamiento ha hecho que las organizaciones cambien sus estrategias, como lo manifestó una mujer miembro de una organización:

La Red de Mujeres de Matagalpa, tomó la decisión de no pedir permiso a la Policía cuando hacemos actos públicos, [...] porque siempre se nos niega, [...] nos han obligado a quitar toldos [y] hemos sido reprimidas. [...] Fuimos a los Derechos Humanos y nos dijeron que esos casos no los atendían [...]. Verdaderamente, ahí hay un sesgo político [y] una pretensión oculta: una intimidación (comunicación personal con mujer de grupo focal de Matagalpa).

En algunos casos de protestas pacíficas las acciones de represión han escalado a niveles muy graves por acción y por omisión. Tal es el caso de estudiantes que acompañaban una toma pacífica por parte de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), en exigencia de la restitución de su pensión mínima que había sido suspendida desde el gobierno de Violeta Barrios. En este contexto, Amnistía Internacional (2014) refirió que los participantes fueron atacados por [...] individuos que llevaban pasamontañas y pañuelos para ocultar su identidad [...] Tanto a los manifestantes de sexo masculino como de sexo femenino los golpearon y les robaron la ropa y otras pertenencias” (p. 6).

Según el informe, “otras víctimas afirmaron que los policías no habían intervenido para ayudarlos cuando los agresores los estaban golpeando y les estaban robando delante de ellos o a pocos metros”. Este organismo internacional manifestó no tener “ninguna investigación sobre este incidente, por ejemplo, del hecho de que la Policía no haya protegido a los manifestantes de sufrir daños, ni de que se haya hecho rendir cuentas a los agresores” (pp. 6-7).

Es importante señalar que la violencia política no siempre tiene una intencionalidad instrumental en términos políticos, sino que está relacionada con conflictos de otra naturaleza, en los que está involucrada una diversidad de actores. Tal es el caso de conflictos por derechos laborales y competencia por recursos en los que están implicados actores del sector empresarial, como se puede apreciar en los siguientes testimonios documentados por el CENIDH y por Amnistía Internacional:

El 18 de enero de 2014, el señor Juan de Dios Cortez murió por el impacto de bala disparada por efectivos de las fuerzas antimotines de la Policía cuando éstos reprimían la protesta que realizaban enfermos de Infección Renal Crónica (IRC) que demandan indemnización al Ingenio San Antonio por el daño en su salud (CENIDH, 2014b, p. 22).

En el caso citado está en juego una grave violación a derechos laborales y socioambientales, agravado por la ineficiencia del sistema de justicia del país y de autoridades con competencia en materia socioambiental como el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente, entre otros. Estos conflictos de carácter económico y socioambiental se han venido incrementando y agravando progresivamente, a raíz de un modelo de desarrollo que privilegia inversión extranjera enfocada a grandes proyectos y actividades extractivas. Desde esta perspectiva, el Estado se vuelve fuente y faci-

litador de violencia por su responsabilidad en el manejo de estos conflictos no resueltos, los niveles de represión y abuso de la fuerza, como se analizará a continuación.

Retomando el problema de los abusos señalados, estos afectan la credibilidad y la confianza en la Policía Nacional, que históricamente ha sido bien valorada por la sociedad nicaragüense, y que ha gozado de reconocimiento internacional por su eficacia en materia de seguridad y de prevención de violencia. Sobre esto, una ciudadana manifiesta:

La población ha perdido la confianza en la misma Policía, que en un inicio se fue profesionalizando [...]. Si bien es cierto no vamos a obviar cosas buenas que hace la institución, por ejemplo, ha dado golpe contundente a las drogas [...] Lo bueno que hacen por un lado lo borran por el otro [...]. Deberían actuar neutralmente, porque la Policía es apolítica (comunicación personal con mujer de grupo focal de Ciudad Antigua).

Según Ortiz (2012), “el recurso a la represión estatal suele tener como objetivo, en la mayoría de los casos, impedir que la población se organice para oponerse al régimen, o que otorgue su apoyo a un grupo de oposición ya existente” (p. 140). Lo anterior se corrobora con el siguiente comentario:

Aunque seamos de cualquier tendencia, creo que hay algo evidente, pues definitivamente movilizarse contra el poder político te genera un costo, y ese costo algunas y algunos lo pagamos caro. El mensaje es claro: vos te movilizás, ok, te vamos a judicializar, te vamos a condenar y eso da miedo [...] La gente no se moviliza [...] por dos razones fundamentales: unos porque andan buscando la comida, la sobrevivencia, y los otros porque tie-

nen miedo (comunicación personal con mujer de grupo focal de Matagalpa)

A juicio de Corey Robin (2009), el ejercicio de estas formas de represión está relacionado con la función del miedo político; que “no es acabar con el individuo, sino tomarlo como ejemplo, mandar el mensaje de que debemos tener cuidado o podríamos ser el siguiente” (p.338). A partir de ciertas situaciones, algunas personas entrevistadas han manifestado miedo o temor que les ha llevado a inhibir ciertas acciones, según la percepción o valoración que hacen de los riesgos en su contexto, como se puede apreciar a continuación:

Existe el hecho de que otros grupos políticos no puedan manifestarse. No se hace por miedo: miedo a expresarse, miedo a escribir, miedo a decir públicamente las cosas que suceden en el país, y a tener que callar y ver pasar en el escenario miles y miles de cosas en el terreno político (comunicación personal con miembro de grupo focal en Managua).

Es importante reconocer que la relación entre la democracia y la represión estatal es mucho más compleja, pues se constata que los actuales sistemas políticos pos-transicionales aún no han logrado erradicar este tipo de abusos de poder que históricamente se han ido enraizando en nuestra sociedad. De igual forma, se requiere profundizar más en su análisis, incorporando la perspectiva de construcción de paz, y las visiones de los actores que la ejercen y de los que se reconocen afectados por la violencia política. Esta línea aportará elementos estratégicos que pueden enriquecer la reflexión y el diálogo para que estas dinámicas no comprometan los avances que se han ido reivindicando en materia de derecho y democratización.

Excurso: Hacinamiento de la población carcelaria

Según el viceministro de Gobernación, Carlos Najar, la población penal de Nicaragua es de 10,569 privados de libertad, cuando el sistema carcelario solo tiene capacidad para menos de 5,000 reclusos, según el Ministerio del Interior (Prado, 2014). Es interesante señalar que algunos entrevistados identificaron esta problemática como una forma de violencia estructural.

El hacinamiento que existe en las celdas [es] una situación peligrosísima, además violatoria hacia los Derechos Humanos. En Río Blanco [...] había dieciséis [reos] en una pequeña celda. Yo les dije: “¿Cómo hacen para dormir?”, y dicen que se acomodaban dos debajo de la cama, dos debajo del catre, dos encima del catre. Esa era una situación inhumana y peligrosa (comunicación directa con defensor de derechos de grupo focal de Matagalpa).

Aunque el Gobierno de Nicaragua¹⁷ se ha comprometido a disminuir el hacinamiento carcelario en un 20% ante representantes de Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, la situación actual representa un problema de derechos humanos que trasciende las limitaciones del sistema carcelario.

Conflictos por los recursos

Favarno y luorno (2013) advierten que desde hace unas décadas se asiste a una nueva etapa del capitalismo, en la que se han acentuado los procesos de acumulación por desposesión, cuya dinámica se basa en la apropiación de territorios y de recursos naturales por parte de megaempresas extractivas, monocultivos a gran escala e industria turística, entre otros, lo que ha generado un repunte de conflictos socio ambientales con mucha presión. Por una parte, por la dependencia creciente de la economía internacional hacia materias primas de la tierra o del subsuelo; y, por otro lado, por el hecho que el mercado

¹⁷Nicaragua ocupa el 4º lugar en proporción de población carcelaria en Centroamérica. 122 privados de libertad por cada 100,000 habitantes, según el Centro Internacional para Estudios de Prisiones.

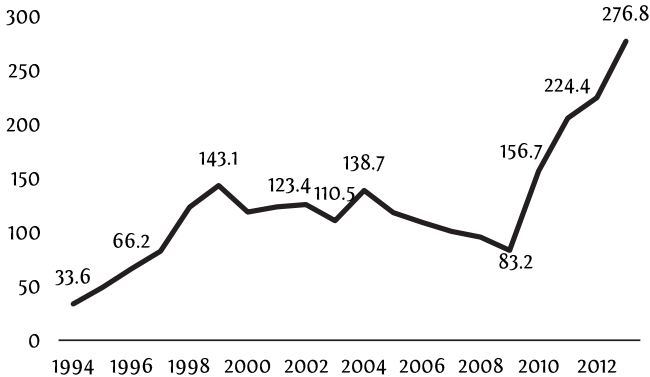
especulativo infla el valor de la cotización de ciertas materias primas y de sus productos derivados. Según Alimonda (2008), las relaciones humanas se han configurado a partir de las condiciones de apropiación y de exclusión establecidas sobre la naturaleza. Son las relaciones sociales de poder las que regulan el acceso, disponibilidad y utilización de los elementos de la naturaleza. Esta regulación alimenta al poder y divide a las sociedades en función de esa disponibilidad y usufructo. Uno de los sectores que ha estado generando conflictos en Nicaragua es la actividad minera, la producción de palma africana, de caña de azúcar, de maní, y otros productos agrícolas en expansión.

Una de las grandes apuestas de la gestión del expresidente Enrique Bolaños y del actual gobierno ha sido el impulso de la industria minera, como se puede observar en el aumento vertiginoso de la producción de oro a nivel nacional (*ver Gráfico 3.2.2.1*). Esta tendencia ha colocado a Nicaragua entre los primeros diez países productores de oro en América Latina y en el puesto 44 en el ranking mundial.

Un estudio realizado por el Centro Humboldt (2014) sobre las concesiones de minería metálica en la zona del Pacífico central de Nicaragua, durante el período 2009-2011, revela que se otorgaron 272 concesiones que representan 10,990.42 km², aproximadamente el 10% de la superficie total del territorio nacional. En otro informe de este mismo centro, de 2011-2013, se constata un aumento general en la entrega de concesiones mineras de un 24% con respecto a 2011, lo que indica que actualmente se encuentra concedido el 13.4% de la superficie total del país, a favor de 446 proyectos mineros. En el 2013 la producción alcanzó los 435.86 millones de dólares que generaron las exportaciones de oro en bruto, lo que representa el 17.24% del valor total de las exportaciones nacionales. A juicio de Pablo Venturo, gerente de país de B2FGOLD, “esas cifras son solo un indicio de una nueva

realidad: Nicaragua es un país minero” (Canales 2014). Según el vicepresidente de la Cámara Minera de Nicaragua (CAMINIC) el país tiene reservas minera para aproximadamente 50 años (Maradiaga 2014, p. 12).

Gráfico 3.2.2.1: Producción minera de Oro (onzas troy)
(en miles)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCN.

Esta tensión entre la apuesta por la industria minera y la lucha por la reivindicación de los derechos socioambientales por parte de las comunidades, ha detonado conflictos sociales y acciones represivas ante la movilización y la resistencia de estas. Un caso histórico y emblemático de resistencia a la minería ha sido el municipio de Rancho Grande, en Matagalpa. Sobre este caso un ciudadano manifestó:

¿Qué más violencia que lo que está pasando en Matagalpa de tenernos desinformados [y] de estar manipulando a la gente con la información [sobre los proyectos mineros]?, [pues] todas [nuestras] necesidades básicas van a ser prácticamente destruidas, principalmente el agua [...] La población está diciendo no a la minería y nadie le está ha-

ciendo caso, ni las autoridades locales ni las autoridades nacionales le están poniendo atención, aunque el discurso [de las autoridades] está diciendo [...] “lo que la gente diga es lo que se va a hacer”, pero ya se tiene más de 10 años en esa lucha (comunicación personal con miembro del grupo focal de Matagalpa).

Según se puede observar, muchos de los proyectos que se están desarrollando se han caracterizado por el hermetismo y por la poca información sobre su implementación y sus múltiples impactos en los territorios. En esta misma línea, la viabilidad y los costos socioambientales de dichos proyectos no han sido consultados a la ciudadanía más afectada directamente, a pesar que la legislación y el marco jurídico nacional lo exigen. No en vano, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (2014) ha exhortado al actual Gobierno de Nicaragua a asumir sus responsabilidades constitucionales hacer cumplir las medidas de protección del medio ambiente e incluso adecuar la legislación actual para tal efecto:

Le pedimos al Gobierno que exija a las compañías mineras que ya operan en el país, las debidas medidas para proteger la vida de las personas y evitar la contaminación del medio ambiente y expresamente negar el permiso para tales obras en territorios vírgenes de explotación minera, como en el caso del municipio de Rancho Grande en Matagalpa, respetando la decisión de sus pobladores. Proponemos que en relación con la minería se reforme la actual ley sobre “Explotación de riqueza de recursos naturales”. (p. 7)

Este mensaje en defensa de los derechos socioambientales de las comunidades afectadas y a favor de la protección de la biósfera va contra corriente a la agenda y las prioridades del actual gobierno que ha estado promoviendo al país como uno de los mejores destinos para

la actividad minera¹⁸ y otro tipo de “inversiones” en un contexto mundial donde las economías emergentes y las potencias económicas ha marcado un giro hacia la re-primarización de la economía internacional impulsada por la creciente e insaciable demanda de materia prima.

El periodista Giorgio Trucchi (2014) señala otro gran desafío relacionado con la violencia económica y política: la criminalización y judicialización de los procesos organizativos comunitarios y la protesta contra la expansión minera en la región centroamericana. Aunque de manera diferenciada, en el caso de Nicaragua se han dado este tipo de situaciones en las que se han violentado el derecho a la protesta a través de actos de intimidación, represión y encarcelamiento. Sobre esto, el CENIDH denunció en un artículo publicado en Envío (2014):

A una líder comunitaria del Movimiento Comunal de Matagalpa [...] la procesaron y la acusaron [...] por hacer una pinta¹⁹ con un “No a la minería” en un muro de la casa que ocupa la [empresa minera] B2Gold. [Además], la multaron con 5 mil córdobas [y] la comunidad recogió la suma para pagar entre todos la multa. (p. 22)

Claramente, la medida coercitiva del Ministerio Público es desproporcionada en relación con la cuantía del daño. Además, dicha acción representa una medida de intimidación política, debido a que se detiene y encarcela a una líder en el contexto de una protesta, cuando en otras acontecimientos como el caso #OcupaINSS, de vulneración a Derechos Humanos y de agresiones de carácter político más abiertas, no se judicializó a nadie. Esto tam-

¹⁸ Dundee Capital Markets, un servicio canadiense sobre inversiones y asesoría financiera, ha situado a Nicaragua como el segundo destino en América Latina, después de Chile, atractivo para la inversión minera, basado en un “ranking de confianza”.

¹⁹Pinta es una leyenda escrita con espray o pintura en una pared, con un mensaje de protesta, similar a un graffiti.

bién ha sucedido en otros municipios, como en Santo Domingo, donde hubo fuertes movilizaciones en contra de la minería. Al respecto, una ciudadana comenta:

Se llevaron como a cuarenta mineros al Chipote, [...] [y] los tuvieron unos días ahí [...]. Que te lleven al Chipote te intimida y ya después uno sale mansito²⁰, [uno] no quiere decir nada. Después [los mineros] se desarticularon totalmente. (Comunicación personal con mujer de grupo focal de Matagalpa)

Como se aprecia en este relato, estas formas de intimidación tienen como objetivo desmovilizar a las personas que se oponen a proyectos de este tipo. Otra estrategia para desarticular las manifestaciones en contra de la minería ha sido impedir las protestas, obstaculizando a las personas para que no logren asistir. Además, se realizan marchas simultáneas por parte de actores vinculados a los intereses mineros, para intimidar, minimizar y disuadir marchas que estaban planificadas previamente. Tal es el caso de una movilización que se tenía prevista en Managua (f13 de agosto de 2014), a la que no se permitió llegar a los manifestantes de otros departamentos. Sobre este caso, el Centro Humboldt denunció en Envío (2014):

[Los manifestantes] fueron detenidos en Palo Seco, municipio de La Dalia (Matagalpa) por antimotines y por policías. Días antes, la Policía local les había negado sin justificación legal alguna los permisos de salida a los buses de transporte público que trasladarían a la población que deseaba movilizarse pacíficamente en la capital. Al impedirles el paso, les quitaron [...] las licencias de conducir y la circulación a los dueños de cuatro camiones y de tres camionetas que se dirigían a

²⁰ Mansito significa domado, domesticado, o neutralizado.

Managua con [ciudadanos] de Rancho Grande. Igual sucedió en el municipio de Santo Domingo (Chontales) donde a 500 personas también se les negó el derecho a la libre movilización [...] deteniendo [...] a los miembros del Movimiento Ambiental Salvemos Santo Domingo. (p. 20)

Con el impedimento de marchas contra la minería se refleja el uso instrumental de la Policía para impedir la movilización, lo que sumado a denuncias similares en otros acontecimientos ha generado desconfianza por parte de la ciudadanía, pues se acusa a la institución de actuar sesgadamente. Por otro lado, es importante señalar que las represalias contra los que se oponen a la minería no han discriminado afiliación política, pues se han ejercido en contra de los mismos militantes y miembros del partido en el Gobierno. Sobre esto un ciudadano comenta:

Hablo como militante del Frente²¹ y entonces me dicen: “tenés que sumarte a trabajar en favor de la minería”, [pero] yo ya anduve diciendo lo malo de la minería, no puedo venir a decir ahora lo bueno, porque no existe. Entonces me dicen: “Bueno, sos un sandinista indireccionado, porque ya no tenés nada que ver con el partido, vas a ser retirado del partido” (comunicación personal con un líder de Matagalpa).

Desafortunadamente, el Estado de Nicaragua en cuanto entidad política ha resultado ser el “más capacitado para orquestar los dispositivos institucionales y manipular las fuerzas moleculares de acumulación de capital a fin de preservar la pauta de asimetrías en el intercambio más provechoso para los intereses capitalistas dominantes (Harvey 2007, p. 109), lo que contradice el discurso y em-

²¹ Frente se le conoce popularmente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)

blemático eslogan gubernamental: “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”.

Otro ámbito que está generando conflictos está relacionado con la producción para la exportación en sectores como la ganadería, la caña de azúcar y la palma africana, entre otros productos. Eduardo Baumeister (2013) advierte que “las áreas destinadas para la producción de caña y de palma africana se han duplicado o cuadruplicado, entre 1990 y 2010 en la región” (p. 21). En el caso de Nicaragua ha sido un incremento del 37%, con un total de 57,428 hectáreas. Este tipo de producción agrícola requiere enormes áreas de tierra, que en muchos casos eran bosques o áreas utilizadas para la producción de alimentos, lo que representa dos problemas o riesgos: (1) reducción de la producción alimentaria y (2) deterioro ambiental, sumado a ello la privatización forzada de propiedades comunales o colectivas a favor de grandes empresas, que en su afán por expandir sus áreas de producción agrícola han implementado estrategias para la concentración de tierras, como ha sucedido en comunidades ubicadas en la Reserva Indio Maíz, en Río San Juan. Según lo comentado por un entrevistado de dicha zona:

Primero es la palma africana con más de 6,000 hectáreas, melina con 4,000 hectáreas, y ahora, desde hace más de un año, una empresa de cacao que ya tiene más de 1,000 hectáreas. [...] Llegan al productor para decirle que venda su tierra [...]. En esta comunidad hay bastante presión [...] hay muchas familias que están quedando rodeadas [...] [y el] acceso a su finca es complicado (comunicación personal con un líder de una comunidad de la Reserva Indio Maíz en Río San Juan).

Esta situación crítica sufrida por estas comunidades como otras en Nicaragua y algunos países empobrecidos pero con rica biodiversidad, se ven amenazadas por el neo-extractivismo impulsado por grandes corporaciones

transnacionales con un enorme poder de influencia sobre los Estados. Este complejo panorama advierte “un conjunto de intereses contrapuestos y afectaciones graves, derechos que tratan de ejercerse o que se conculcan, en medio de una discusión sobre el desarrollo y de crítica a los modelos dominantes basados en una concepción de dominio sobre la naturaleza” (Beristaín 2010, p.24). En la lógica de acumulación por desposesión, David Harvey (2007) señala que “el Estado, con su monopolio de la violencia y su definición de la legalidad, desempeña un papel decisivo en el respaldo y promoción de estos procesos” (p. 116), e incluso ha amparado y protagonizado graves situaciones de corrupción como lo denuncia la Conferencia Episcopal de Nicaragua (2014):

Proponemos al Gobierno que afronte con firmeza el grave problema del irrespeto al medio ambiente y a los recursos naturales. De manera sistemática y reiterada se vienen escuchando los clamores de las etnias de las riberas del río Coco, zona norte, zona atlántica y otras zonas del país, acerca de la existencia de una mafia maderera que viene depredando las pocas reservas verdes que nos quedan: Bosawás y Prinzapolka, Cordillera Dipilto-Jalapa, la reserva Indio Maíz y otras zonas no menos importantes para la biodiversidad. En estos lugares operan individuos y organizaciones, que al amparo corrupto de las autoridades municipales y nacionales, continúan su labor depredadora sin restricción de ningún tipo, ignorando las muchísimas leyes existentes protectoras del medio ambiente”. (p. 7)

Finalmente, recalcar lo que Hans-Jürgen Burchardt (2014) ha formulado lúcidamente en un reciente análisis crítico sobre la conflictividad generada por el extractivismo y sus formas de violencia política y socioeconómica que “no giran exclusivamente en torno del reparto de la naturaleza como base material de la (re)producción social y de las rentas extractivas, sino también en torno de las

diferencias con respecto a la idea [y modelos] de desarrollo” (p. 10) en nuestras sociedades.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

A partir del acercamiento a las múltiples formas de violencia se constata que la seguridad es un desafío que presupone condiciones justas en el campo social, político, cultural y económico. Desde esta perspectiva, la construcción de paz se vislumbra como el desafío de generar un contexto en cuyo sistema de relaciones prevalece un alto nivel de justicia que revierta las múltiples condiciones que generan violencia.

En el caso de Nicaragua, el estudio de la violencia no puede prescindir de su raigambre histórica y de su contexto social, político, cultural y económico. Este enfoque teórico y metodológico permite visualizar la interrelación entre las distintas formas de violencia desde sus causas, manifestaciones y consecuencias. Además, este abordaje posibilita la identificación de factores de contención de la violencia y el aprendizaje de lecciones a partir del análisis en retrospectiva.

Ha resultado pertinente el estudio de la violencia en sus tres dimensiones según la propuesta de Galtung: directa, estructural y cultural. Por primera vez, se ha desarrollado una aproximación a las múltiples formas de violencias en Nicaragua desde estas dimensiones, lo que abre nuevas líneas de investigación:

Línea 1. Incorporación del tema de la percepción de la violencia al análisis del conocimiento y victimización.

Línea 2. Análisis de factores socioculturales como determinantes de la emergencia y contención de la percepción y victimización de las formas de violencia.

Línea 3. Profundizar en el estudio de la compleja relación entre conflicto político, violencia y democracia en construcción.

Línea 4. Integrar la dimensión territorial y cartográfica al análisis del conjunto de indicadores de la violencia.

Por otro lado, se constató que las formas de violencia más reconocidas son las que se ejercen de manera cotidiana y que han sido socialmente aprendidas. En cambio, las formas de violencia de naturaleza criminal --que requieren una forma organizada-- afectan a la ciudadanía en menor medida. También hay un claro reconocimiento de la población en cuanto a que la discriminación es una forma de violencia, sin embargo, falta profundizar en la discriminación como forma de violencia política, por tanto, es necesario reflexionar y estudiar más sobre sus prácticas y consecuencias. Sobre la violencia política se reconoce que sigue siendo un problema y desafío de la sociedad nicaragüense que podría comprometer las condiciones actuales de la democracia.

Finalmente, la sociedad nicaragüense debe aprovechar y reivindicar su *bono organizativo* y la cultura preventiva, que combinados han resultado efectivos en materia de seguridad. Sumado a ello, los gobiernos, sociedad civil, y en particular las universidades, deben renovar esfuerzos para asegurar que la violencia y las desigualdades actuales sean tratadas de manera integral, fomentando la plena inclusión social, económica y política.

REFERENCIAS

- Acevedo, A. (1993). *Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional: El pozo sin fondo de ajuste*. Managua: Latino.
- Acevedo, C. (2006). *Los costos económicos de la violencia en Centroamérica*. San Salvador: Consejo Nacional de Seguridad.
- Aguirre, C. & Sánchez, M. (2014). *Pentecostales y carismáticos en Nicaragua*. Managua: Centro de Análisis Socio Cultural e Instituto Universitario de Opinión Pública.
- Alimonda, H. (2008). *Gestión Ambiental y Conflicto Social en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Amnistía Internacional. (2010). *Se pide a la ONU que condene la prohibición del aborto en Nicaragua*. Recuperado de <http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/nicaragua-peticion-a-onu-condene-prohibicion-aborto-20100204>
- Amnistía Internacional. (2014). *Principales motivos de preocupación sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Información de Amnistía Internacional para el examen periódico*

universal de la ONU, abril-mayo de 2014. Londres: Amnistía Internacional.

Aragón, A. & López, I. (2013). *Perfil de salud ocupacional Nicaragua.* (Serie salud, trabajo y ambiente No.13). San José: Instituto Regional de Estudios en sustancias Tóxicas (IRET-UNA), Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA).

Baumeister, E. (2013). *Concentración de tierras y seguridad alimentaria en Centroamérica.* Roma: Coalición Internacional para el Acceso a la tierra.

Beristaín, C. & Riera, F. (1993). *Afirmación y Resistencia: La comunidad como apoyo.* Barcelona: Virus Editorial.

Beristaín, C. (1998). *Guatemala: Nunca más.* (Tomo I). Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

Beristaín, C. (2010) *El derecho a la reparación en los conflictos socioambientales.* Bilbao: Instituto Hegoa UPV/EHU.

Booth, J. (2013). *Cultura política de la democracia en Nicaragua y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades.* Nashville: Vanderbilt University.

Briceño-León, R. (2007). *Sociología de la violencia en América Latina.* Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Burchardt, J. (2014) *Logros y contradicciones del extractivismo. Bases para una fundamentación empírica y analítica.* Recuperado de <http://nuso.org/policyPapers.php>

- Cabrera, M. (diciembre, 2002). Vivimos y sobrevivimos en un país multidelos. *Envío*, (248). Recuperado de <http://www.envio.org.ni/articulo/1190>
- Calderón, P. (2009). Teoría de conflicto de Johan Galtung. *Paz y Conflictos*, (2) 63-81.
- Canales, G. (26 de febrero de 2014) *Nicaragua es un país minero. Entrevista con Pablo Ventura*. La Prensa de Nicaragua, p. 4C.
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Ipas y Movimiento Autónomo de Mujeres. (2013). *Sobre el derecho a la integridad personal de niñas, mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua*. Recuperado de <http://www.movimientoautonomodemujeres.org/downloads/148.pdf>
- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. (2014a). *Impunidad de las Violaciones a los Derechos Civiles y Políticos en Nicaragua en el contexto del Debilitamiento Institucional (2007-2013)*. Mangua: Autor
- Centro Nicaragüense de Derecho humanos. (2014b). *Informe Anual Derechos Humanos en Nicaragua 2013*. Mangua: Autor.
- Centro Humboldt. (2014). *Estado Actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua, 2012-2013*. Recuperado de [http://www.humboldt.org.ni/sites/default/files/Estudio%20Full%20Color%20\(Versión%20Final%20Web\).pdf](http://www.humboldt.org.ni/sites/default/files/Estudio%20Full%20Color%20(Versión%20Final%20Web).pdf)

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
(2013). *Panorama Social de América Latina*. Santiago de Chile: Autor.
- Close, D. (2009). La otra cara de la política nicaragüense: los anti-sandinistas. En S. Martí i Puig & D. Close. (Eds.), *Nicaragua y el FSLN [1979-2009] ¿Qué queda de la revolución?* (pp. 59-82). Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Córdoba, R. (2012). Crimen e inseguridad en C.A. una lectura desde las encuestas de opinión. En F. Díaz & P. Meller (Eds.), *Violencia y Cohesión Social en América Latina* (pp. 105-162). Chile: Uqbar Editores.
- Cruz, J. M. (2003). Violencia y democratización en Centroamérica: El impacto del crimen en la legitimidad de los regímenes de posguerra. *América Latina Hoy*, (35), 19-59.
- Cuadra, E. (2002). Nuevas dimensiones de la seguridad ciudadana en Nicaragua. En F. Carrión (Ed.), *Seguridad Ciudadana, ¿espejismo o realidad?* (pp. 189-203). Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Organización Panamericana para la Salud y Organización Mundial para la Salud.
- Dammert, L. (2012). Inseguridad, crimen y cohesión social: ¿Es posible pasar del discurso a la evidencia? En F. Díaz & P. Meller (Eds.), *Violencia y Cohesión Social en América Latina* (pp. 27-48). Chile: Uqbar Editores.
- Davenport, C. (1996). Constitutional Promises and Repressive Reality. A Cross-National Time-Series

- Investigation of Why Political and Civil Liberties are Suppressed. *The Journal of Politics*, 58(3), 627-54.
- Davenport, C. (2004). The Promise of Democratic Pacification: An Empirical Assessment. *International Studies Quarterly*, 48(3), 539-560.
- Envío. (2014). Rancho Grande: Guardianes de Yaoska contra la minería de oro. *Envío*, (391), 15-22.
- Esgueva, A. (2011). *Elecciones, reelecciones y conflictos en Nicaragua (1821-1963)*. Managua: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica.
- Falisse, M. & Quintana, M. (2012). *Análisis estratégico de los actores no estatales en Nicaragua*. (Informe Final). Managua: EPRD Office for Economic Policy and Regional Development Ltd.
- Favarno, O & Iuorno, G. (2013). Los recursos mineros y la protesta ciudadana en la Argentina de la última década. En C. Barreira, R. González & L. Trejos (Eds.), *Violencia política y conflictos sociales en América Latina* (pp. 214-242). Bogotá: CLACSO.
- Ferrero, M. D. (2010). *La Nicaragua de los Somoza 1936-1979*. Huelva: Universidad de Huelva.
- Fundación Internacional para el Desafío Económico Global. (2014). *Dinámicas de la pobreza en Nicaragua 2009-2013*. Recuperado de http://www.fideg.org/images/FIDEG_-_DINMICAS_DE_LA_POBREZA_EN_NICARAGUA_2009-2013.pdf

- Frühling, H. (2005). La reforma de la policía y el proceso de democratización. En H. Frühling, J. Tulchin, & H. Golding (Eds.), *Crimen y violencia en América Latina* (pp. 29-62). Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Frühling, H., Tulchin, J. & Golding, H. (Eds.). (2005). *Crimen y violencia en América Latina*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Galtung, J. (1998). *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. Bilbao: Gernika Gogoratuz.
- Galtung, J. (2003). *Violencia Cultural* (Documento No. 14). Bilbao: Gernika Gogoratuz.
- García, M. (2011). Capital social y clientelismo: otra limitación para el control social. *Polis*, 10(29), 2-18.
- Gelles, R. (1983). An Exchange/social control theory. En D. Finkelhor, R. Gelles, G. Hotaling, & M. Straus (Eds.), *The Dark Side of families: Current Family Violence Research* (pp. 151-165). London: Sage Publications.
- González, E. (2006). Sobre el concepto de represión. *Hispania Nova*, (6), 1-26.
- González, E. (2012). La represión Estatal como proceso de violencia política. *Hispania Nova*, (10), 313-335.

- Granera, A. & Cuaresma, S. (1997). *Evolución del delito en Nicaragua*. Managua: UCA Editores.
- Greenwald, G. (2014). *Snowden, sin un lugar donde esconderse. Edward Snowden, la NSA y el Estado de vigilancia de EE.UU.* Barcelona: Ediciones B. SA.
- Harvey, D. (2007) *El nuevo imperialismo*. Madrir: Editorial Akal.
- Huhn, S. (2008). La percepción social de la inseguridad en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. *Ciencias Sociales*, IV(122), 149-165.
- Huhn, S., Oettler, A. & Peetz, P. (2007). La construcción de realidades inseguras. Reflexiones acerca de la violencia en Centroamérica. *Ciencia Sociales*, III-IV(117-118), 73-89.
- Indart, G. (2000). *Reformas económicas y pobreza en Nicaragua*. Recuperado de <http://decon.edu.uy/network/panama/indart.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística. (2004). *Ajustes de los factores de expansión por post-estratificación*. Recuperado de <http://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/taller14/18.pdf>
- Latinobarómetro. (2014). *Las religiones en tiempos del Papa Francisco*. Santiago de Chile: Autor.
- Lohmann, S. (1996). El clientelismo político en la democracia representativa. *Cuadernos Económicos de Información Comercial Española*, 62(1), 105-119.

- López, L., Blanco, L., Aragón, A. & Partanen, T. (2008). La salud de los trabajadores de la maquila. Temas básicos, evidencia disponible y un estudio piloto en Nicaragua. *Medicina Social*, 3(3), 233-241.
- López, M. (2008). Comprensión. En R. Reyes. (Dir.), *Diccionario crítico de Ciencias Sociales*. Recuperado de <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comprehension.htm>
- Maradiaga, H. (11 de agosto de 2014) Motor de desarrollo. Suplemento Minería Responsable. *La Prensa de Nicaragua*, pp. 12-14.
- Martín-Baró, I. (2012). *Acción e Ideología. Psicología Social desde Centroamérica*. (2ª Ed. 15ª Reimpresión). San Salvador: UCA Editores.
- Mendoza, C. (9 de octubre de 2011). *Homicidios en Guatemala 1986-2011*. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://ca-bi.com/blackbox/?p=5690>
- Miller, D. (1995). *On Nationality*, New York: Oxford University Press.
- Montegro, S., Cuadra, E., Saldomando, A. & Zamora, Y. (2005). *Nicaragua: la gobernabilidad al servicio de las reformas*. Managua: Centro de Investigaciones de la Comunicación.
- Morrison, A., Buvinic, M. & Shifter, M. (2005). América violenta: factores de riesgo, consecuencias e implicaciones para las políticas sobre la violencia social y doméstica. En H, Frühling, J. Tulchin, & H. Golding, (Eds.), *Crimen y Violencia en América Lati-*

- na* (pp. 117- 154). Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- O'Donnell, G. (2011). La retrospectiva de Schitter: algunas notas de desacuerdo. *POSTData*, 16 (1), 27-31.
- Oettler, A. (2013). Justicia transicional y los significados de la Elaboración del pasado nicaragüense. *Encuentro*, (95), 7-27.
- Orozco, R. (2014). ¿El país más seguro de Centroamérica? La politización de las instituciones es el mayor riesgo a nuestra seguridad. *Envío*, (390), 14-22.
- Ortiz, W. (2012). Comentarios y reflexiones en torno a la violencia política en Colombia. *FORUM*, (3), 133-144.
- Parkman, P. (2003). *Insurrección no violenta en El Salvador: La caída de Maximiliano Hernández Martínez*. San Salvador: Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, y University of Arizona Press.
- Pérez-Baltodano, A. (2008). *Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación: providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el desarrollo histórico de Nicaragua*. Managua: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica y Fundación Friedrich Ebert.
- Pérez-Sáinz, J. P. (2014). *Mercados y bárbaros. La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina*. San José: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Pichardo, F. (2010). *Policía galardonada en feria del conocimiento*. Recuperado de:

<http://www.policia.gob.ni/cedoc/PNNgaldardonadaFC.pdf>

Pinheiro, S. (2002). Introducción. En J. Méndez, G. O'Donnell, & P. S. Pinheiro. (Comps.), *La (in)efectividad de la Ley y la exclusión en América Latina* (pp. 15-28). Buenos Aires: Paidós.

Policía Nacional de Nicaragua. (2013). *Anuario Estadístico 2012*. Managua: Autor.

Prado, Y. (7 de mayo de 2014). Nicaragua presenta informe ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura. *El 19 Digital*. Recuperado en: <http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:18306-nicaragua-presenta-informe-ante-el-subcomite-para-la-prevencion-de-la-tortura>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). *Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuesta para América Latina*. Nueva York: Autor.

Rivera, M. (2009). *Estado de Derecho y Democracia. La lógica de la represión estatal en América Latina (1981-2005)* (Tesis de Maestría). Recuperada de la base de datos de FLACSO, Ecuador.

Rivera, M. (2010). Estudios sobre represión estatal en regímenes democráticos. Teorías, métodos, hallazgos y desafíos. *Política y gobierno*, XVII (1), 59-95.

Robin, C. (2009). *El miedo. Historia de una idea política*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Rodríguez, J. (2006). *Un marco teórico para la discriminación* (Colección de Estudios No. 2). México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
- Samour, H. (2003). *Voluntad de liberación la filosofía de Ignacio Ellacuría*. Granada: Comares.
- Sánchez, M. (2010). *Conflictos del pasado y nuevos escenarios de violencia en Centroamérica*. Recuperado de <http://www.albasud.org/publ/docs/36.pdf>
- Sautu, R. (2003). *Todo es teoría: Objetivos y métodos de investigación*. Buenos Aires: Lumiere.
- Segovia, A. (2004). Centroamérica después del café: el fin del modelo agroexportador tradicional y el surgimiento de un nuevo modelo. *Ciencias Sociales*, 1(2), 5-38.
- Schedler, A. (2007). *Patterns of repression and manipulation in electoral authoritarian regimes*. (Documento de Trabajo No. 1890). Recuperado de <http://libreriacyde.com/librospdf/DTEP-189.pdf>
- Schnyder, M. C. (2011). *Política y violencia en la Democracia Argentina. La democratización sub-nacional a la luz de las prácticas partidarias y los usos de la policía durante el Juarismo en Santiago de Estero*. (Tesis doctoral, Universidad Nacional de Rosario). Recuperada de <http://hdl.handle.net/2133/3275>
- Serbín, A. (Coord.) (2008). *Construcción de paz y diplomacia ciudadana en América Latina*. Buenos Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales e Icaria Editorial.

- Serra, L. (2011). *Las representaciones sociales y la reproducción de la pobreza en Nicaragua*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Stuart, R (2010). *Consejos del Poder Ciudadano y gestión pública en Nicaragua*. Managua: Centro de Estudios y Análisis Político.
- Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House-McGraw-Hill.
- Tilly, C. (1985). War Making and State Making as Organized Crime. En P. Evans, D. Rueschemeyer & T. Skocpol. (Eds.), *From Bringing the State Back* (pp. 169-191). Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, C. (2006). *Regimes and Repertoires*. Chicago: The University of Chicago Press,
- Torres-Rivas, E. (2011). *Revoluciones sin cambios revolucionarios*. Guatemala: F&G Editores.
- Trucchi, G. (7 de septiembre de 2014). *Crecimiento de la industria minera en Centroamérica produce mitos, paradojas y realidades trágicas* [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2014/09/reportaje-crecimiento-de-la-industria.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). *Intentional homicide count rate per 100000 population (1995-2011)*. Viena: Autor.
- Van der Gulden, C. (1994). *Vocabulario Nicaragüense*. Managua: UCA Editores.

Wolin, S. (1960). *Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Zinecker, H. (2012). *Más muertos que en la guerra civil: el enigma de la violencia en Centroamérica*. Leipzig: Fundación Friedrich Ebert.

Zinecker, H. (2013). *El bajo índice de violencia en Nicaragua: ¿Mito o realidad?* México: Fundación Heinrich Böll.

«Violencia y Ciudadanía. Una aproximación a sus múltiples expresiones en Nicaragua», se terminó de imprimir en febrero de 2015 en la Impresora y Encuadernadora Imprime, S.A. Bolonia Sumedico 1c al Oeste. Su composición tipográfica fue elaborada por Rony Rodríguez y Douglas Castro. Se utilizó Fontin de 14, 12, 11, 10, 9, 8. La edición consta de 500 ejemplares en español y 500 en inglés.

En comparación con el resto de países centroamericanos, Nicaragua tiene la tasa de homicidio más baja. Por eso, la literatura al respecto se concentra en explicar este hecho sorprendente, corriendo el peligro de trivializar la violencia real, dejando "a la deriva" su fenomenología. Esta obra llena dicha laguna al concebir un concepto más amplio de violencia y al confrontar las experiencias concretas de violencia y sus percepciones, junto con su historización, así el discurso sobre violencia obtiene un giro fundado y crítico. Es un libro crítico que advierte en el momento justo el desafío de que Nicaragua reivindique y conserve su (positivo) estado excepcional en la región.

Heidrun Zinecker | Universität Leipzig

El libro que tienen en sus manos es una obra que trata de un tema crucial en la sociedad nicaragüense contemporánea, y lo hace con rigor y con una visión multidimensional, evitando el sensacionalismo y el tremendismo. Nos da cuenta de "muchas violencias" que generalmente no se toman en cuenta, como son las derivadas de la desigualdad, las necesidades básicas no satisfechas, la discriminación por género o fenotipo, o el universo de micro-violencias que permean la vida cotidiana.

Salvador Martí i Puig | Universidad de Salamanca

Un análisis consistente de las violencias en la Nicaragua actual, y una reflexión crítica y aleccionadora para quienes estén interesados o comprometidos con el desarrollo de las democracias y la convivencia pacífica en la región centroamericana. Llama la atención sobre el hecho que incluso transformaciones sociales profundas –como las transiciones democráticas, o la refundación del Estado que implicó la revolución nicaragüense– no garantizan la eliminación de enclaves culturales en Estados y sociedad que reproducen patrones de comportamiento autoritario, excluyente y violento.

Carlos Ramos | Director FLACSO-Programa El Salvador

Comprender los nuevos escenarios de conflicto y violencia que se están produciendo en Nicaragua es esencial para entender mejor, con una visión más compleja y matizada, la evolución que viene sufriendo la sociedad nicaragüense. Bajo la calma aparente, la desigualdad y las dinámicas de acumulación en beneficio de unos pocos crean nuevos escenarios de conflicto que comprometen la seguridad, el desarrollo y el buen vivir de amplias mayorías.

Ernest Cañada | Coordinador de ALBA SUD, Centroamérica